

Se necesitan los dos tercios de los votos que se emitan.

— Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Queda aprobada la moción.

11

INDICACION

Sr. Presidente (Romero C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: deseo formular una indicación, aunque previamente formularé una pregunta: ¿cuál es el criterio de la Presidencia para girar los asuntos a las comisiones? ¿Por la competencia — como establece el reglamento — o por la pertenencia del presidente de la comisión a determinado bloque político?

Formulo estos interrogantes porque nos hemos encontrado con la sorpresa de que el proyecto en revisión sobre ley de patentes medicinales no ha sido girado a la Comisión de Legislación General. Destaco que el artículo 63 del reglamento establece que esa comisión debe dictaminar en toda cuestión de naturaleza civil o comercial. Obvio es recordar que la ley de patentes atañe a cuestiones esencialmente civiles y de derecho comercial.

De manera que esta indicación está precedida por una queja que se vincula con la relación que debemos tener — ecuaníme, por cierto — para el funcionamiento de este cuerpo. En este sentido, destaco a la Cámara que, como presidente de la Comisión de Legislación General, formule a las autoridades un pedido por escrito: que el proyecto de ley de patentes sancionado por el Senado sea también girado a la Comisión de Legislación General que, en rigor de verdad, como sucedió también con el proyecto de ley de vivienda del Poder Ejecutivo, debió haber sido la comisión cabecera.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — La Presidencia tomará en cuenta la indicación formulada por el señor diputado por Buenos Aires.

(12)

REGIMEN REGULATORIO DEL COSTO DE LOS PROCESOS INICIALES (Orden del Día N° 1.071)

I

Dictamen de mayoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Legislación General han considerado el proyecto de ley en revisión, de

Régimen Regulatorio del Costo de los Procesos Iniciales, Modificación al Código Civil, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y a las leyes 19.551 (texto ordenado en 1984), 20.744 (texto ordenado en 1976), 21.839 — complementariedad de normas al Código Civil —; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconsejan su sanción.

Sala de las comisiones, 1º de diciembre de 1994.

César Arias. — Osvaldo A. Bracchi. — Tomás W. González Cabañas. — Carlos R. Álvarez. — Rogelio R. Ceidera. — Susana Ayala. — Carlos E. Branda. — Carlos E. Dellepiane. — Luisa C. Donni. — Ramón F. Giménez. — María L. Leguizamón. — Marco A. Michelli. — Carlos E. Soria.

En disidencia parcial:

Francisco de Durañona y Vedia. — Raúl Álvarez Echagüe.

En disidencia total:

Carlos A. Becerra. — Nicolás A. Garay. — Juan O. Gauna. — Elsa D. R. Kelly. — Enrique J. Mathov.

Buenos Aires, 27 de abril de 1994.

Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, don Alberto R. Pierrí.

Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a fin de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha, ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en revisión a esa Honorable Cámara:

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorpórase al artículo 505 del Código Civil el siguiente párrafo:

Si el incumplimiento de la obligación, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad por el pago de las costas, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera y única instancia, no excederá del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Art. 2º — Incorpórase al artículo 521 del Código Civil el siguiente párrafo:

En este caso, no será aplicable el tope porcentual previsto en el último párrafo del artículo 505.

Art. 3º — Incorpórase al artículo 1.627 del Código Civil el siguiente párrafo:

Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales. Cuando el precio por los servicios prestados deba ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de normas locales, su determinación deberá adecuarse a la labor cumplida por el prestador del servicio. Los jueces deberán reducir equitativamente ese precio, por debajo del valor que resultare de la aplicación estricta de los mínimos arancelarios locales, si esta última condujere a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida.

Art. 4º — Sustitúyese el segundo párrafo del inciso 1º del artículo 277 de la ley 19.551 (texto ordenado en 1984), por el siguiente texto:

La sindicatura es ejercida por contadores públicos diplomados y abogados; en ambos casos, con más de cinco (5) años de ejercicio profesional.

Art. 5º — Incorpórase al artículo 281 de la ley 19.551 (texto ordenado en 1984), el siguiente párrafo:

Idéntico tratamiento tendrá el síndico designado si fuera abogado y requiriera el concurso de un contador público diplomado. De ser abogado el síndico, serán a su cargo exclusivo, los honorarios que pudieran devengarse a favor de otros abogados que asistieren en su gestión, salvo la hipótesis prevista en el artículo 282 *in fine* de la presente ley.

Art. 6º — Incorpórase al primer párrafo del artículo 283 de la ley 19.551 (texto ordenado en 1984), el siguiente texto:

También podrá recaer la designación en contadores públicos diplomados y abogados de la matrícula, especializados o idóneos.

Art. 7º — Incorpórase como artículo 309 bis de la ley 19.551 (texto ordenado en 1984), el siguiente texto:

En los procesos de revisión de verificaciones de créditos y en los de verificación tardía, se regularán honorarios de acuerdo a lo previsto para los incidentes en las leyes arancelarias locales, tomándose como monto del proceso principal el del propio crédito insinuado y verificado.

Art. 8º — Incorpórase al artículo 277 de la ley 20.744 (texto ordenado en 1976), el siguiente párrafo:

La responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del veinticinco por ciento (25 %) del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales, correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superaran dicho porcentaje, el juez procederá a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el cómputo del porcentaje indicado no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Art. 9º — Incorpórase como último párrafo del artículo 77 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:

Los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el cincuenta por ciento (50 %) de los honorarios que le fueran regulados, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 478.

Art. 10. — Incorpórase como primer párrafo del artículo 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, el siguiente:

Los jueces deberán regular los honorarios de los peritos y demás auxiliares de la Justicia, conforme a los respectivos aranceles, debiendo adecuarlos, por debajo de sus topes mínimos inclusive, a las regulaciones que se practicaren en favor de los restantes profesionales intervinientes, ponderando la naturaleza, complejidad, calidad y extensión en el tiempo de los respectivos trabajos.

Art. 11. — Declárase aplicable lo dispuesto en los artículos 77 y 478 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, con las modificaciones introducidas por la presente ley, al procedimiento ante el fuero del trabajo instituido por la ley 18.345.

Art. 12. — Modifícase la ley 21.839 en las partes que a continuación se indican:

a) Sustitúyese el artículo 2º por el siguiente:

Los profesionales que actuaren para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en la presente ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediere condena en costas a cargo de otra de las partes intervinientes en el proceso.

b) Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:

La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, en la

medida de su oficiosidad, salvo en los casos en que conforme a excepciones legales pudieran o debieran actuar gratuitamente.

Se presume gratuito el patrocinio o representación de los ascendientes, descendientes o cónyuge del profesional.

Las disposiciones de la presente ley se aplicarán supletoriamente a falta de acuerdo expreso en contrario.

c) Derógase el artículo 5;

d) Sustitúyese el inciso c) del artículo 6º por el siguiente:

El resultado que se hubiere obtenido en la relación entre la gestión profesional y la probabilidad de efectiva satisfacción de la pretensión reclamada en el juicio por el vencido.

e) Sustitúyese el artículo 8º por el siguiente:

Salvo pacto en contrario, los honorarios de los abogados no podrán ser regulados en sumas inferiores a quinientos pesos (\$ 500) en los procesos de conocimiento, trescientos pesos (\$ 300) en los procesos de ejecución y doscientos pesos (\$ 200) en los procesos voluntarios. Cuando se tratare de procesos correccionales, los honorarios mínimos serán de quinientos pesos (\$ 500), y en los demás procesos penales serán de un mil pesos (\$ 1.000).

Las regulaciones mínimas previstas deberán adecuarse, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 10 y en el capítulo III de la presente ley.

f) Sustitúyese el artículo 9º por el siguiente:

Los honorarios de los procuradores serán fijados entre un treinta por ciento (30 %) y un cuarenta por ciento (40 %) de lo que les correspondiere a los abogados.

Cuando los abogados también actuaren como procuradores percibirán los honorarios que correspondiere fijar si actuaren por separado abogados y procuradores.

g) Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

Cuando el honorario debiere regularse sin que se hubiere dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará monto del proceso la suma que, razonablemente, y por resolución fundada, hubiera correspondido a criterio del tribunal, en caso de haber prosperado el reclamo del pretensor. Dicho monto no podrá ser en ningún caso superior a la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvencción, cuando ésta se hubiere deducido.

h) Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:

En los procesos por expropiación, el monto será el de la diferencia que existiere entre el importe depositado en oportunidad de la desposesión y el

valor de la indemnización que fijare la sentencia o se acordare en la transacción, comparados en valores constantes.

i) Sustitúyese el artículo 29 por el siguiente:

En los procesos por retrocesión, el monto será la diferencia entre el valor del bien al tiempo de la sentencia que hiciere lugar a aquella y el importe de la indemnización que hubiere percibido el expropiado o, en su caso, el de la transacción, todos ellos comparados en valores constantes.

j) Sustitúyese el último párrafo del artículo 30 por el siguiente:

En los divorcios por presentación conjunta de los cónyuges, los honorarios mínimos serán de quinientos pesos (\$ 500) para el patrocinante de cada cónyuge, salvo pacto por monto inferior.

k) Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente:

En los incidentes, el honorario se regulará entre el dos por ciento (2 %) y el veinte por ciento (20 %) de lo que correspondiere al proceso principal, atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudieren tener con la solución definitiva del proceso principal, no pudiendo el honorario, salvo pacto en contrario, ser inferior a la suma de cincuenta pesos (\$50).

l) Sustitúyese el artículo 36 por el siguiente:

En los procesos por hábeas corpus, amparo y extradición, el honorario no podrá ser inferior a la suma de quinientos pesos (\$500), salvo pacto en contrario.

m) Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente:

Los importes de las multas constituirán recursos específicos del Poder Judicial de la Nación de conformidad a lo previsto en el artículo 3º de la ley 23.853.

n) Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 36 por el siguiente:

Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento de las asociaciones profesionales de abogados y procuradores, o de oficio, y una multa de un mil pesos (\$ 1.000) solidariamente a los infractores.

ñ) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 58 por el siguiente:

Los honorarios de los abogados por su labor extrajudicial, podrán convenirse con el cliente, pudiendo observarse las siguientes pautas:

a) Sustitúyense los montos señalados en el artículo 58 por los siguientes:

En el inciso a): veinte pesos (\$ 203).

En el inciso b): cincuenta pesos (\$ 50).

En el inciso c): sesenta pesos (\$ 60).

En el inciso d): quinientos pesos (\$ 500).

En el inciso e): cien pesos (\$ 100).

En el inciso f): doce mil quinientos pesos (pesos 12.500).

En el inciso f''): de doce mil quinientos un pesos (\$ 12.501) a setenta y cinco mil pesos (\$ 75.000).

En el inciso f'''): setenta y cinco mil un pesos (\$ 75.001).

En el inciso g): trescientos pesos (\$ 300).

p) Derógase el artículo 60.

q) Sustitúyese el artículo 61 por el siguiente:

Las deudas de honorarios, pactadas o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, serán actualizadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley de convertibilidad 23.928, de acuerdo con el índice de precios al por mayor, nivel general, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las sumas actualizadas devengarán un interés del seis por ciento (6%) anual. A partir de la fecha antes indicada, esas deudas devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina.

Art. 13. — Los jueces deberán regular honorarios a los profesionales, peritos, síndicos, liquidadores y demás auxiliares de la Justicia, por la labor desarrollada en procesos judiciales o arbitrales, sin atender a los montos o porcentuales mínimos establecidos en los reglamentos arancelarios nacionales o locales que rijan la actividad, cuando la naturaleza, alcance, tiempo, calidad o resultado de la tarea realizada o el valor de los bienes que se consideren, indicaren razonablemente que la aplicación estricta, lisa y llana de esos aranceles ocasionaría una evidente e injustificada desproporción entre la importancia del trabajo efectivamente cumplido y la retribución que en virtud de aquellas normas arancelarias habría de corresponder. En tales casos, la resolución que así lo determine deberá indicar, bajo sanción de nulidad, el fundamento expreso y circunstanciado de las razones que justificaren la decisión.

Déjanse sin efecto todas las normas arancelarias que rijan la actividad de los profesionales o expertos que actúen como auxiliares de la justicia, por labores desarrolladas en procesos judiciales o arbitrales, en cuanto se opongan a lo dispuesto en el párrafo anterior.

Art. 14. — Los profesionales o expertos de cualquier actividad podrán pactar con sus clientes la retribución de sus honorarios sin sujeción a las escalas contenidas en las correspondientes normas arancelarias. En caso de que tales honorarios deban ser abonados por labores

desarrolladas en procesos judiciales o arbitrales, quedará a salvo el derecho de los profesionales de percibir honorarios a cargo de otra parte condenada en costas.

Art. 15. — Lo dispuesto en los artículos 13 y 14 de la presente ley es complementario del Código Civil.

Art. 16. — Invítase a las provincias a adherir al presente régimen, en lo que fuera pertinente.

Art. 17. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

EDUARDO MENEM.
Edgardo R. Piazzoli.

INFORME

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Legislación General al considerar el proyecto de ley en revisión, de Régimen Regulatorio del Costo de los Procesos Iniciales, Modificación al Código Civil, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y a las leyes 19.551 (texto ordenado en 1984), 20.744 (texto ordenado en 1976) 21.839 —Complementariedad de Normas al Código Civil—; luego de su análisis le prestan acuerdo favorable, informándose asimismo que los señores legisladores que firman en disidencia parcial y total presentarían los respectivos informes en ocasión de su tratamiento por esta Honorable Cámara.

Rogelio R. Cordera.

II

Dictamen de minoría

Honorable Cámara:

Las comisiones de Justicia y de Legislación General han considerado el proyecto de ley en revisión, de Régimen Regulatorio del Costo de los Procesos Iniciales, Modificación al Código Civil, al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y a las leyes 19.551 (texto ordenado en 1984), 20.744 (texto ordenado en 1976), 21.839 —complementarias de normas al Código Civil—; y, por las razones expuestas en el informe que se acompaña y las que dará el miembro informante aconsejan la sanción del siguiente

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Incorporase a la ley 21.839, título II, capítulo IV —Procedimiento regulatorio y costo— el artículo 47 bis, el que quedará redactado de la siguiente manera:

En todo litigio judicial o arbitral, cualquiera fuere la fuente del incumplimiento de la obligación que lo origine, la responsabilidad por el pago de los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin a la litis, ni inferiores a los honorarios mínimos fijados por esta ley.

Si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a la ley arancelaria, correspondientes a todas las profesiones y especialidades superaran dicho porcentaje, el juez o árbitro procederá a prorratar los montos entre los beneficiarios, respetando siempre los mínimos legales.

Para el cómputo del porcentaje indicado, no se tendrá en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que hubieren representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.

Art. 2º — Modifícase la ley 21.839 en las partes que a continuación se indican:

a) Sustitúyese el artículo 2º por el siguiente:

Los profesionales que actúen para su cliente con asignación fija, periódica, por un monto global o en relación de dependencia, no están comprendidos en la presente ley, excepto respecto de los asuntos cuya materia fuere ajena a aquella relación o cuando mediare condena en costas a cargo de otra de las partes intervinientes en el proceso.

b) Sustitúyese el artículo 3º por el siguiente:

La actividad profesional de los abogados y procuradores se presume de carácter oneroso, en la medida de su oficiosidad, salvo en los casos en que, conforme a excepciones legales, pudieran o debieran actuar gratuitamente. Se presume gratuito el patrocinio o representación de los ascendientes, descendientes o cónyuge del profesional. Las disposiciones del presente artículo se aplicarán supletoriamente a falta de acuerdo expreso en contrario.

c) Derógase el artículo 5º.

d) Sustitúyese el artículo 8º por el siguiente:

Salvo pacto en contrario, los honorarios de los abogados no podrán ser regulados en sumas inferiores a mil pesos (\$ 1.000) en los procesos de conocimiento, setecientos pesos (\$ 700) en los procesos de ejecución y quinientos pesos (\$ 500) en los procesos voluntarios. Cuando se tratare de procesos correccionales, los honorarios mínimos serán de mil pesos (\$ 1.000), y en los demás procesos penales serán de dos mil pesos (\$ 2.000). Las regulaciones mínimas previstas deberán adecuarse, en su caso, a lo dispuesto en el artículo 10 y en el capítulo III de la presente ley.

e) Sustitúyese el artículo 9º por el siguiente:

Los honorarios de los procuradores serán fijados entre un treinta por ciento (30 %) y un cuarenta por ciento (40 %) de lo que les correspondiere a los abogados.

Cuando los abogados también actúen como procuradores, percibirán los honorarios que correspondiere fijar si actúen por separado abogados y procuradores.

f) Sustitúyese el artículo 20 por el siguiente:

Cuando el honorario deba regularse sin que se hubiere dictado sentencia ni sobrevenido transacción, se considerará monto del proceso la suma que, razonablemente, y por resolución fundada, hubiera correspondido a criterio del tribunal, en caso de haber prosperado el reclamo del pretensor. Dicho monto no podrá ser en ningún caso superior a la mitad de la suma reclamada en la demanda y reconvención, cuando ésta se hubiere deducido.

g) Sustitúyese el artículo 28 por el siguiente:

En los procesos por expropiación, el monto será el de la diferencia que existiere entre el importe depositado en oportunidad de la desposesión y el valor de la indemnización que fijare la sentencia o se acordare en la transacción, comparados en valores constantes.

h) Sustitúyese el artículo 29 por el siguiente:

En los procesos por retrocesión, el monto será la diferencia entre el valor del bien al tiempo de la sentencia que hiciere lugar a aquélla y el importe de la indemnización que hubiere percibido el expropiado o, en su caso, el de la transacción todos ellos comparados en valores constantes.

i) Sustitúyese el último párrafo del artículo 30 por el siguiente:

En los divorcios por presentación conjunta de los cónyuges, los honorarios mínimos serán de mil pesos (\$ 1.000) para el patrocinante de cada cónyuge.

j) Sustitúyese el artículo 33 por el siguiente:

En los incidentes, el honorario se regulará entre el diez por ciento (10 %) y el veinte por ciento (20 %) de lo que correspondiere al proceso principal atendiendo a la vinculación mediata o inmediata que pudieren tener con la solución definitiva del proceso principal, no pudiendo el honorario, salvo pacto en contrario, ser inferior a la suma de cien pesos (\$ 100).

k) Sustitúyese el artículo 36 por el siguiente:

En los procesos por hábeas corpus, amparo y extradición el honorario no podrá ser inferior a la suma de quinientos pesos (\$ 500) salvo pacto en contrario.

l) Sustitúyese el artículo 53 por el siguiente:

Los importes de las multas constituirán recursos específicos del Poder Judicial de la Nación de conformidad a lo previsto en el artículo 3º de la ley 23.853.

II) Sustitúyese el segundo párrafo del artículo 56 por el siguiente:

Sin perjuicio de la sanción penal que correspondiere, podrá disponerse la clausura del local a simple requerimiento de las asociaciones profesionales de abogados y procuradores, o de oficio, y una multa de un mil pesos (\$ 1.000) solidariamente a los infractores.

m) Sustitúyese el primer párrafo del artículo 58 por el siguiente:

Los honorarios de los abogados por su labor extrajudicial, podrán convenirse con el cliente, pudiendo observarse las siguientes pautas.

n) Sustitúyense los montos señalados en el artículo 58 por los siguientes:

En el inciso a): cincuenta pesos (\$ 50).

En el inciso b): cien pesos (\$ 100).

En el inciso c): doscientos pesos (\$ 200).

En el inciso d): mil pesos (\$ 1.000).

En el inciso e): doscientos pesos (\$ 200).

En el inciso f): doce mil quinientos pesos (pesos 12.500).

En el inciso f) de doce mil quinientos un pesos (\$ 12.501) a setenta y cinco mil pesos (pesos 75.000).

En el inciso f'): setenta y cinco mil un pesos (\$ 75.001).

En el inciso g): trescientos pesos (\$ 300).

ñ) Derógase el artículo 60.

o) Sustitúyese el artículo 61 por el siguiente:

Las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, serán actualizadas hasta la fecha de cobro en vigencia de la Ley de Convertibilidad 23.928, de acuerdo con el índice de precios al por mayor, nivel general, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las sumas actualizadas devengarán un interés del seis por ciento (6 %) anual. A partir de la fecha antes indicada, esas deudas devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina.

Art. 3º — Invítase a las provincias a adherir al presente régimen en lo que fuera pertinente.

Art. 4º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Sala de las comisiones, 1º de diciembre de 1994.

José G. Dumón. — Leopoldo M. Orquín. —

Pedro O. Figueroa. — Horacio Perinetti.

— José M. Antelo. — Raúl Trettel Meyer.

INFORME

Honorable Cámara:

Señor presidente, si se considera necesario "promover un mejoramiento general del servicio de justicia asegurando un amplio acceso al mismo a todos los sectores de la población", tal como lo fundamenta en su mensaje 360/93 el Poder Ejecutivo con proyecto de ley de un Régimen Regulatorio del Costo de los Procesos Judiciales, no resulta procedente la normativa impuesta para "alcanzar una solución que abarque la totalidad del país".

Y ello es así, por cuanto debemos respetar las facultades provinciales para la regulación procesal de la actividad en sus respectivos tribunales de justicia y la normativa consecuente que regula los aranceles profesionales correspondientes.

La Constitución Nacional de 1853, en su artículo 67 establecía que corresponde al Congreso "dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y de Trabajo y Seguridad Social" (inciso 11), precepto que se ha mantenido —en lo esencial— en la reciente reforma (ver artículo 75, inciso 12). Tal como se compadece con el artículo 104 (actual 121), en virtud del cual las provincias se reservan todo el poder no delegado al gobierno federal.

Queda en claro, pues, que el dictado de la legislación procesal es un poder que se han reservado las provincias: en esa inteligencia, la Constitución de la provincia de Córdoba —por ejemplo—, reformada en 1987, a través de su artículo 110 confiere al Poder Legislativo la atribución de "dictar los códigos y leyes procesales" (inciso 22).

Y siendo las costas —y consecuentemente los honorarios profesionales— materia específica del derecho procesal, es indudable que su regulación corresponde a las provincias, por ser un poder no delegado al gobierno de la Nación. Es dable recordar que el instituto de las "costas" es estudiado por los procesalistas y sólo circunstancialmente por la doctrina del derecho sustancial.

Además, esta Cámara ha aprobado por unanimidad la unificación de la legislación civil y comercial el día 3 de noviembre de 1993 ("Gaceta Legislativa" 6/93), cuerpo normativo que se halla a consideración del Honorable Senado, desde el 12 de noviembre de 1993, en la Comisión de Legislación General. Y por lo tanto, no es posible modificar el articulado del Código Civil vigente como lo propone el Poder Ejecutivo y lo sanciona el Senado, sin incurrir en contradicción legislativa con el citado texto aprobado.

Por lo expuesto, nuestro dictamen se particulariza con la Ley de Arancel de Honorarios 21.839, de aplicación para la justicia nacional en lo federal, justicia nacional en lo civil, en lo comercial, en lo criminal y correccional, en lo penal económico y en la justicia nacional del trabajo, incorporando y modificando sus artículos para obtener una disminución en las costas judiciales en lo que hace a honorarios de los profesionales. A la luz de las normas proyectadas es indudable que el juez tendrá en sus manos la facultad de establecer la retribución justa del profesional, conforme a un adecuado e imprescindible estudio de las circunstancias del caso.

Por ello nuestro dictamen, al incorporar a la citada ley el artículo 47 bis, cumple con el objetivo propuesto puesto que los honorarios profesionales, de todo tipo, correspondientes a la primera o única instancia —ya se trate en litigio judicial o arbitral— no excederán del 25 % del monto de la sentencia ni serán inferiores a los honorarios mínimos que se fijan por nuestra reforma.

Raúl A. Trettel Meyer. — José M. Antelo.

Sr. Presidente (Romero, C. A.).— En consideración en general.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias.— Señor presidente: el proyecto en consideración venido en revisión del Honorable Senado tiene por objetivo promover un mejoramiento general del servicio de justicia, asegurando —como señala el mensaje del Poder Ejecutivo— un amplio acceso a todos los sectores de la población que con frecuencia ven dificultado el ejercicio de sus derechos por la onerosidad de los honorarios profesionales y demás gastos causídicos, situación que afecta especialmente a los niveles de menores recursos económicos.

Resulta evidente que ambos dictámenes —los de mayoría y minoría— coinciden en la búsqueda de la concreción de este objetivo. Sin embargo, existen discrepancias profundas. Así, para lograr lo que pretendemos, en el dictamen de mayoría se propicia la modificación de tres artículos del Código Civil: los artículos 505 y 525 (libro II, sección de las obligaciones) y el artículo 1.627 de la sección tercera, a fin de lograr la plena vigencia del principio de la autonomía de la voluntad del artículo 1.197, especialmente en lo referido al principio igualitario que debe regir respecto de los precios convenidos en los contratos, específicamente en los de locación de servicios.

Cuando el artículo 505 se refiere a los efectos de las obligaciones contempla la situación del acreedor y del deudor. Con respecto a aquél, determina que al cumplimiento de la obligación se puede acceder por la utilización de los medios legales pertinentes que posibiliten la satisfacción de aquello a lo que el deudor se ha obligado; para hacérselo procurar por otro a costa del deudor y, por último, para obtener del deudor la reparación del perjuicio resultante del incumplimiento.

El proyecto de ley en consideración cuando el incumplimiento se traduce en un litigio judicial o arbitral, a fin de abaratar los costos del juicio, establece un límite en la totalidad del pago de las costas que, incluidos los honorarios profesionales, no podrá exceder el 25

por ciento resultante de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo.

Además, se determina que las regulaciones deben adecuarse a las leyes arancelarias y a los usos locales correspondientes a los profesionales y especialistas que participen en el proceso. Cuando se exceda el límite fijado por la norma que ahora se le suma al artículo 505, deberá procederse a prorratear los montos entre los beneficiarios.

En lo que respecta a la modificación del artículo 521, se refiere al caso de una inejecución de carácter doloso. No rige más la limitación del nuevo supuesto que contempla el artículo 505, última parte, por aquello del distinto tratamiento que debe darse a quien respeta o cumple con el principio de la buena fe o de la lealtad y de quien no lo hace.

En consecuencia, para este caso no rige la limitación del 25 por ciento y evidentemente el deudor que está en esta situación actuando con malicia —utilizando las palabras del Código Civil— o con dolo —como correspondería de acuerdo con el criterio doctrinario— sufre una sanción pecuniaria porque se le aplica la regulación en plenitud sin restricción o limitación alguna.

El tercer supuesto de la legislación de fondo que se modifica es el artículo 1.627 del Código Civil vinculado con el precio de los servicios en el contrato de locación de servicios, con el agregado de que las normas locales no pueden exceder los límites que se hayan pactado entre las partes. Es decir que este acuerdo no puede ser modificado o restringido por las disposiciones locales.

También se modifica la legislación de carácter mercantil, en particular en materia de concurso. Se fijan modificaciones respecto de la ley laboral y en particular de la ley de aranceles para abogados.

Entre los dictámenes de mayoría y de minoría no existen diferencias sustanciales en el contenido de las normas, sí en sus alcances. Tanto es así que podemos establecer que por una totalidad aproximada de 30 supuestos existen 18 tópicos o temas con igual regulación. En general, tenemos los mismos elementos contingentes, la misma valoración y diferencias en el *quantum* respecto de los montos mínimos en una serie de casos que están contemplados en la ley de aranceles profesionales.

De esta manera estamos avanzando en la determinación de los puntos fundamentales de disidencia que se relacionan con el órgano legisferante que puede determinar estas modifi-

caciones. Mientras nosotros lo hacemos a través de la legislación de fondo, de los códigos de forma y de leyes en materia arancelaria, el dictamen de minoría lo hace específicamente por medio de la legislación local: es decir, reglando para la Capital Federal y las jurisdicciones federales y en el resto del territorio determinando los límites. Toda esta materia está resumida y contenida en la regulación que se hace respecto de la ley 21.839. ¿A qué obedece la diferencia? Nosotros tenemos el pleno convencimiento de que en esta materia tiene competencia para legislar el Congreso de la Nación mientras que la minoría considera que existe un atasco sobre el federalismo y que se están afectando los límites establecidos en los artículos 67, incisos 11 y 104 de la Constitución Nacional antes de su reforma. Pero coincidimos en lo que se refiere a que debemos remitirnos a las prescripciones de los actuales artículos 75 inciso 12, 121 y 126 de la Carta Magna. Así, el dictado de la legislación de fondo —Código Civil, legislación mercantil, Código Penal y demás cuerpos legales enunciadados en dicha norma— es materia del Congreso de la Nación; la restante pertenece a las provincias.

También debemos poner de manifiesto cuáles son los límites en lo que se refiere a la materia propia del Congreso de la Nación por vía del dictado de los códigos citados precedentemente. O sea que todo lo relacionado con el Código Civil y el Código de Comercio es competencia del Congreso de la Nación, que es el que determina la materia propia de estos ordenamientos normativos y remite a las provincias lo que queda afuera, de modo que son sólo los miembros de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores de la Nación los que hacemos esta determinación.

Siguiendo el criterio y la sistemática del propio Vélez Sarsfield podemos decir que en el Código Civil existen numerosas normas de carácter procedimental a él incorporadas e inclusive a la legislación de fondo como, por ejemplo, la ley 19.551. En tal sentido, nos remitimos ejemplificativamente a la protocolización de testamentos y en cuanto a la materia propia del proyecto en análisis —honorarios— podemos citar el artículo 451 del Código Civil, que establece lo que debe percibir el tutor por los cuidados y trabajos que brinda a los bienes del menor. Esta percepción se ha fijado en la décima parte de los frutos líquidos de los bienes del menor, o sea que es el propio código el que determina el porcentual que va a percibir el acreedor, que en este caso es el tutor, y sobre qué bienes deberá efectuarse esta regulación.

En la ley 14.394, sobre bien de familia, no solamente se determinan los honorarios profesionales; también se fija un límite máximo, un techo, pues su artículo 48 dice así: "En los juicios referentes a la transmisión hereditaria del bien de familia, los honorarios de los profesionales intervinientes no podrán superar al 3 por ciento de la valuación fiscal, rigiéndose por los principios generales la regulación referente a los demás bienes."

Otra observación que se ha formulado es que dado que el 3 de noviembre de 1993 este cuerpo aprobó por unanimidad las modificaciones al Código Civil y la unificación de toda la legislación de fondo, no se puede incurrir en los artículos 305, 321 y 1.627 del citado cuerpo normativo, porque se estaría incurriendo en una incoherencia. Esto no es verdad y voy a explicar por qué.

Las normas que se pretende incorporar no son contradictorias con las que este cuerpo aprobó anteriormente. En particular el artículo 305 se mantiene con la misma redacción que tenía antes de que esta Cámara introdujera modificaciones a esa normativa.

En el artículo 521 fue eliminado su anterior contenido; en consecuencia, al disponer una nueva norma, lo único que hacemos es reemplazar un texto que había sido suprimido del Código Civil. Esto significa que el artículo 521 se mantiene con un nuevo contenido.

En lo concerniente al artículo 1.627, la modificación estaría referida —además de incorporar el principio de la autonomía de la voluntad— al cambio de la expresión "árbitros" que utilizaba el Código por el de "jueces". De este modo introducimos una mejora en la terminología.

Por lo expuesto consideramos que el proyecto en consideración no es contradictorio con anteriores pronunciamientos de este cuerpo sino que más bien complementa aquella acción y mantiene su sentido.

Finalmente deseo señalar que la propuesta del dictamen de mayoría no sólo se corapadece con la sistemática del Código de Vélez Sarsfield y con sus fuentes, sino también con el espíritu que predominó en su redacción. Es justamente en esta sección donde tuvo particular incidencia la fuente mediata —no la inmediata, que es Ceyna—, tal como surge de las propias notas de Vélez Sarsfield. Me refiero a Pothier, uno de los dos grandes juristas que en Obligaciones constituyeron las fuentes de los cuatro redactores del Código de Napoleón. Entre ellos quien mayor influencia ejerció fue precisamente Pothier, que contribuyó a que se incorporara prin-

cipios moralizadores a la legislación común. Este espíritu de moralización está contenido en el dictamen que proponemos a la consideración de este cuerpo, para el que solicitamos su aprobación.

Sr. Presidente (Romero, C. A.). — Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.

Sr. Trettel Meyer. — Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical deseo plantear y fundamentar nuestra disidencia total respecto del despacho de mayoría contenido en el Orden del Día N° 1.071, con relación al proyecto sancionado por el Senado el 27 de octubre del corriente año, referido al régimen regulatorio de las costas procesales.

Antes de realizar la fundamentación de nuestra disidencia, deseo efectuar algunas reflexiones.

En primer lugar, nos llama poderosamente la atención que este tema de los honorarios profesionales en los procesos judiciales haya sido tratado con anterioridad en un libro titulado *Programa de asistencia al Poder Legislativo*, editado por la Fundación Mediterránea, a través del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana. También nos llama la atención el hecho de que las razones y fundamentos que da esa institución —seria institución—, que sirve de apoyo técnico a los grupos económicos, sean coincidentes con los fundamentos expuestos por el Poder Ejecutivo en el mensaje que acompaña el respectivo proyecto.

La segunda reflexión está vinculada a la intención que se persigue con este proyecto —así lo dice el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos— de disminuir el índice de litigiosidad que se estima muy elevado en nuestro país. Para ello se propicia la reducción de las costas judiciales. Este razonamiento contiene una contradicción y un sincretismo jurídico, ya que al bajar las costas indudablemente estaremos propiciando una mayor litigiosidad.

También deseo hacer una reflexión que se vincula con las reiteradas actitudes que ha mantenido el Poder Ejecutivo con respecto a los proyectos que nos ha remitido. Hace pocos días hemos sancionado un proyecto de ley vinculado con el financiamiento para la construcción de viviendas. Para ello hemos realizado un manipuleo genético de las normas de fondo de nuestro sistema legal. Hemos reformado el Código Civil, el Código de Comercio y otras leyes.

En este caso que nos ocupa, para bajar las costas judiciales, estamos modificando el Código Civil, el Código de Comercio, la ley de contrato de trabajo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, la ley de quiebras y otras más. Es decir que de alguna manera estamos faltando el respeto —esto es grave— en el mejor sentido de la palabra a nuestras tradiciones jurídicas. Todo esto nos trae aparejado un grado también importante de desequilibrio y de inseguridad jurídica, cuya consecuencia podría ser la inseguridad judicial.

Consideramos que este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que cuenta con sanción del Senado, constituye un verdadero desguisado jurídico; en tal sentido, el dictamen de mayoría nos sugiere muchos reproches. Podemos decir que es inconstitucional, por cuanto invade facultades reservadas a las provincias. Esta iniciativa también nos merece reproches dado que carece de una técnica jurídica que preserve la sistematización de la legislación de fondo y, además, arbitrariamente introduce disputas en las incumbencias profesionales, que tienen larga tradición en nuestra legislación. Por último, creemos que el proyecto engendra un problema de gravedad institucional ya que apareja el riesgo cierto de desprotección al judicialable. A continuación voy a exponer en torno de estos enunciados.

En forma unánime la doctrina sostiene que las costas judiciales constituyen todos los gastos que deben afrontarse en el proceso, resultando innecesario diferenciar entre los gastos —que son los que asumen las partes para tramitar la litis— y las costas, entendidas como obligaciones de pagar del litigante contrario a quien las originó.

No cabe duda de que el tema de las costas judiciales —dentro de las cuales se incluyen concretamente los honorarios profesionales— constituye materia procesal. Es en este punto donde sostenemos la inconstitucionalidad de las normas introducidas en la modificación de los artículos 505, 521 y 1627 del Código Civil, en cuanto avanza sobre las jurisdicciones locales. Desde ya, fundamos este reproche de inconstitucionalidad en el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional, que prácticamente reproduce la disposición contenida en el inciso 11 del artículo 67 de la vieja Constitución. Dicho inciso expresa: "Dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería, y del Trabajo y Seguridad Social, en cuerpos unificados o separados..." —subrayo lo siguiente— "...sin que tales códigos alteren las jurisdicciones lo-

cales...". Por otra parte, el artículo 121 de nuestra Carta Magna establece que las provincias conservan todo el poder no delegado por la Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación.

Las dos normas guardan en el tema una armonía total. No se puede avanzar a través de la legislación de fondo en las legislaciones locales. Pero, más allá de las opiniones que podemos verter los legisladores en este recinto, existe la jurisprudencia que en forma pacífica y continua ha venido manteniendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, primero, en cuanto a que lo relativo a imposición de costas constituye un problema accesorio y, segundo, por su carácter procesal, materia propia de la legislación provincial y de los jueces locales.

Pero si existiera alguna duda sobre si la legislación de fondo puede incursionar en materia procesal, también al respecto la Corte se ha expedido en forma inveterada, sosteniendo que dictar normas procesales sólo corresponde a la Nación cuando sea necesario para asegurar la eficacia de las instituciones reguladas por los códigos de fondo.

Tanto la Ley Fundamental como la jurisprudencia del más alto tribunal están marcando en forma clara y precisa el serio apartamiento del texto constitucional si pretendemos introducir modificaciones de tipo procesal en la legislación de fondo, es decir en el Código Civil y en el de Comercio.

En relación con la modificación del artículo 505 del Código Civil debo expresar que no se advierte en qué medida la limitación del 25 por ciento del monto de la sentencia asegura la eficacia de los derechos del acreedor, más aún teniendo en cuenta que el régimen de imposición de costas en todos los órdenes procesales está a cargo del vencido y que el acreedor que se vea en la necesidad de recurrir al litigio judicial como consecuencia del incumplimiento de su deuda, en nada ve perjudicado el importe de su acreencia y el ejercicio de sus derechos si las costas que se cargan al incumplidor superan o no el porcentaje indicado.

Del análisis en particular del artículo 505 del Código Civil, que establece que cuando el cumplimiento de las obligaciones, cualquiera sea su fuente, derivase en litigio judicial o arbitral, la responsabilidad en el pago de las costas, incluye los "honorarios profesionales" de todo tipo allí devengados, se desprende la diferenciación entre honorarios y costas; en las costas están incluidos no sólo los honorarios de los profesio-

nales intervinientes sino las tasas de justicia provinciales, los aranceles que por distintos medios deben pagar las partes, y las actuaciones previas al litigio. Lo más importante es que de este modo también se limita y atenta —por cuanto en las costas están incluidos los aportes jubilatorios— contra las cajas profesionales —no sólo la de abogados— de los distintos participantes del proceso. Con el correr del tiempo esto producirá un desfinanciamiento de las cajas. Incluso, en el párrafo 2º del artículo 125 del nuevo texto constitucional se expresa que las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para los empleados públicos y para los distintos profesionales.

Es decir que en forma indirecta y a corto plazo se provocará un desfinanciamiento de las cajas profesionales. Además, se va a desconocer un texto constitucional que fue introducido mediante la reforma de 1994.

La modificación al artículo 521 también nos merece objeciones. El proyecto prevé la no aplicación del tope del 25 por ciento cuando la inexecución de las obligaciones fuese maliciosa. En este aspecto se confunde a la institución de las costas con la aplicación de sanciones procesales, lo que es una incoherencia. El agregado propuesto aparece como una sanción que desnaturaliza el instituto de las costas. Además, el profesional que interviene en el litigio desempeña la misma actividad, ya sea que el incumplimiento fuese malicioso o no; asimismo, el incumplimiento malicioso no siempre produce una mayor actividad procesal.

También nos merece reproche la reforma introducida al artículo 1627 del Código Civil. Existe una contradicción. Por un lado, se establece el principio de libertad de contratación y, por otro, se impone al juez un apartamiento de las normas arancelarias.

Ello está en contra del espíritu de la reforma. Por una parte, se pretende el desconocimiento de las normas arancelarias y, por otra, se reconoce la vigencia de este cuerpo normativo.

Habíamos dicho que el dictamen de mayoría carece de una adecuada técnica jurídica. Es cierto lo que se ha expresado en ese sentido. Esta Cámara ha aprobado un proyecto de modificación de la legislación privada en materia civil y comercial. Ahora volvemos a introducir modificaciones, destruyendo de alguna manera la sistematización que tan celosamente ha sido preservada por todos los organismos jurisdiccionales, por la doctrina y por los profesionales.

Por último, quiero referirme a un tema que entraña gravedad institucional, por cuanto acarrea el riesgo cierto de desprotección al judiciable.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Carlos Ernesto Soria.

Sr. Trettel Meyer. — No encuentro mejor manera de expresarme que a través de un ejemplo. Se ha fijado un tope máximo del 25 por ciento para costas, incluidos honorarios profesionales. Me quiero colocar en la situación de quien debe reclamar judicialmente una deuda laboral de mil pesos. En este caso, el tope legal sería de 250 pesos para costas, incluidos honorarios. Esto significa que con esa suma se deberán pagar la tasa de justicia, el aporte a la caja profesional, los gastos judiciales y los peritos.

Me pregunto si de este modo no estamos rebaseando la posibilidad de acceder a la justicia, cuando quien debe realizar el trabajo profesional no se ve mínimamente remunerado en orden al tiempo de dedicación y a su capacidad profesional.

Sobre la base de este último criterio, en el proyecto que apoyamos hemos establecido topes mínimos más allá de los cuales no podrán descender las regulaciones de honorarios.

Por las razones expresadas y las que seguramente señalarán los expositores posteriores, nuestro bloque va a rechazar totalmente esta iniciativa. Guardando la lógica del pensamiento jurídico, hemos redactado un proyecto que no vulnera las garantías y los derechos que la Constitución Nacional acuerda a las provincias, limitándonos a la modificación de la ley 21.839 —Código Arancelario Nacional—, al introducir en el título II, capítulo IV —“Procedimiento regulatorio y cobro”— el artículo 47 bis, cuya redacción es la siguiente: “En todo litigio judicial o arbitral, cualquiera fuere la fuente del incumplimiento de la obligación que lo origine, la responsabilidad por el pago de los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederá del veinticinco por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin a la litis...” —y agregamos— “...ni inferiores a los honorarios mínimos fijados por esta ley”.

Hemos seguido de alguna manera el criterio del dictamen de mayoría en cuanto modifica este código arancelario. Así lo hemos determi-

nado en relación con lo dispuesto en la modificación al artículo 3º; además, propiciamos la derogación del artículo 5º.

También hemos intentado adecuar las regulaciones mínimas cuando, por las distintas tareas que se desarrollen, deban fijarse honorarios a los cuales deberán ajustarse los jueces.

Creo humildemente haber cumplido mi labor en este informe que realicé por el bloque que represento. En consecuencia, solicito la aprobación del proyecto del bloque de la Unión Cívica Radical. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: voy a ocupar muy poco tiempo de la Honorable Cámara para referirme a esta cuestión que se plantea en el proyecto que está en discusión y que muchas veces ha sido motivo de debate no sólo en los ámbitos legislativos sino también en los forenses, en la docencia universitaria y en el campo doctrinario.

Difícil resulta fijar una posición demasiado estricta cuando el tema ha quedado planteado de la forma que lo han hecho los señores diputados Arias y Trettel Meyer. En las dos exposiciones encontramos que hay razones lógicas y atendibles; encontramos también en esa prolija síntesis que han hecho ambos señores diputados las ideas básicas formuladas en la doctrina, en esta Cámara, en los debates de comisión y en lo que ha formado parte de la discusión del Honorable Senado.

Sería casi imposible pretender dar una opinión contundente en este asunto de por sí complejo; por consiguiente, me parece más propio referirme al objeto que la ley persigue, a la forma en que esto se logra y a las dificultades que debe atravesar este proyecto no sólo en su tratamiento, sino en su aplicación práctica una vez convertido en ley, algo que fácilmente puede vislumbrarse de la exposición formulada por el señor diputado Trettel Meyer.

Las leyes que establecen aranceles, sobre todo las que se refieren a la profesión de abogado, siempre han merecido críticas porque todas han avanzado sobre principios superiores que están en la legislación civil y que indican que lo que acuerdan las partes relacionadas por un contrato libremente conforma una norma que entre ellas debe ser respetada como la ley misma. Todo aquello que con motivo de atender situaciones de orden gremial, que se han exagerado hasta el punto de encontrar al profesional del derecho como víctima de presun-

los abusos de su cliente, ha ido modificando en estas leyes de jerarquía menor, de contenido local, lo que son los principios generales del derecho.

Además, es bien conocida en los tribunales la técnica oscura e imprecisa que no comprende el hombre común, y que hace que se generen sospechas sobre la actividad del profesional al extremo de que en un determinado momento dentro de un expediente judicial se producen conflictos entre el profesional y su propio cliente, sin que éste pueda advertir con claridad cuándo ocurrió tal circunstancia. Este tipo de hechos han desprestigiado las normas que rigen estas actividades por tener un carácter tuitivo exagerado y desproporcionado con el objeto que persiguen.

Resulta dudoso que las leyes de arancel —estas leyes locales que pueden dictar las provincias— sean instrumento jurídico válido para crear obligaciones. Todos sabemos que éstas tienen que tener su causa en el contrato, en el cuasicontrato, en el delito, en el cuasidelito o en la ley.

Considero que la ley que debe establecer un vínculo o generar la obligación, es decir, la ley creadora que ligue a una persona al pago de un servicio o de una suma de dinero a otra, debe estar en la legislación de fondo y no en leyes de orden local. Estas no tienen aptitud para crear ese vínculo jurídico, ya que sólo puede hacerlo el órgano que tiene atribución para dictar el Código Civil, es decir, el Congreso de la Nación, según lo establece el inciso 12 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

No encuentro impedimento para que se establezca que será el Código Civil el que fije la creación de esta obligación. De esa manera será el código de fondo, el que rige el derecho sustantivo, el que establezca esta obligación que emana de la ley en el sentido de pagar las costas, los servicios y los honorarios que pueden resultar de un trabajo profesional. Por lo tanto, no es descaminado el principio que incluye el proyecto en consideración.

Es cierto que esta norma suscita reservas y observaciones, porque aunque haya algo que puede ser aceptado y que tiene su fundamento —como es que el Código Civil establece estas normas— no significa que todo el proyecto respete esa estructura jurídica, ya que si lo analizamos en profundidad veremos que este tipo de cuestiones deben ser resueltas con mayor tiempo y reflexión a fin de crear el sistema apropiado.

Es cierto lo manifestado por el señor diputado preopinante en el sentido de que los procedimientos, —lo que deben hacer los jueces en un proceso, este tipo de reglas—, únicamente pueden ser establecidos por la legislación común cuando sirven de soporte para el eficaz cumplimiento de esas normas.

Si recorremos los códigos Civil, Comercial y de Minería encontramos que hay reglas de procedimiento. En la Ley de Concursos también existen reglas de procedimiento. A su vez tanto el Código Civil como el Código de Comercio o el de Minería se refieren al juez e indican cuál debe ser su actitud en innumerables situaciones de derecho sin que por eso pueda expresarse que existe una vulneración al principio constitucional en el sentido de que tales códigos no deben alterar las jurisdicciones locales.

El Código de Minería de la Nación, en su artículo 1º, dice: "Este código rige los derechos, obligaciones y procedimientos...". También encontramos procedimientos en los demás códigos que he señalado. Por consiguiente esta norma tampoco debe producir escándalo pues se refiere a cómo deben actuar los jueces y qué criterio deben utilizar para establecer estas regulaciones. Debemos partir de la base de que la obligación que se impone de pagar dichas regulaciones también debe nacer del derecho sustantivo, como he dicho en el curso de esta intervención. Pero, no obstante esta circunstancia, creo que este tema merecía un capítulo especial. No me complace que el aspecto sustantivo entre en el Código Civil por la vía del incumplimiento. En este sentido para el artículo 505 se dice que en el caso de incumplimiento el reclamo no podrá exceder, etcétera.

Si realmente se están estableciendo normas de contenido sustantivo por la vía de un hecho patológico como es el incumplimiento y su reclamo, si no existiera el incumplimiento y la parte obligada al pago cumpliera con su obligación de buen grado, en este caso habría personas que por tal circunstancia podrían tener un tratamiento diferente al que se regula para el caso de incumplimiento. A partir de allí ciertas derivaciones a que nos conduce un texto forzado pueden hacerlo perfectamente objeto de impugnaciones y observaciones, como las que ha hecho el señor diputado Trettel Meyer.

Por lo tanto, este proyecto de ley con todos sus defectos que no son pocos —y menciono entre paréntesis la incongruencia de su artículo 13, segundo párrafo— puede ser objeto de mejora en la discusión en particular. Por ese motivo he firmado en disidencia parcial el despacho de ma-

yoría, y creo que puede ser mejorado teniendo en cuenta algunas propuestas del dictamen de minoría.

Si tuviera que elegir entre el dictamen de mayoría y el de minoría, me quedaría con el primero —que he firmado— porque considero que es el que mejor logra el objeto que la ley persigue, y que ha sido caracterizado perfectamente por los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra.

Aquí se trae a colación el tema de la obligación y del vínculo en el Código Civil y se establece el criterio que deben seguir los jueces como un soporte necesario de la aplicación establecida en ese código y se logre el objeto que la ley persigue. Por eso lo prefiero, pero a medida que vamos entrando en el detalle de la norma encontramos situaciones que pueden llevar a esta ley al desprestigio o a una disimilitud de interpretaciones jurisprudenciales cuando llegue la hora de su aplicación práctica.

El dictamen de minoría procura ser más cuidadoso, aunque a mi juicio presenta el defecto de querer encerrar la aplicación principal en leyes de jerarquía inferior y me parece que de ninguna manera cumple con el objeto que persigue esta zarandeada legislación al decir que se invita a las provincias a seguir un temperamento que la ley sólo logra aplicar a la reglamentación local en materia de aranceles profesionales. Entiendo que esto presenta un aspecto ilusorio que no tendrá resultados en el novimiento legislativo de las provincias y obviamente demorará —por las circunstancias que conocemos— la obtención de los fines que la ley se propone.

Sr. Gauna. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Durañona y Vedia. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Soria). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna. — Señor presidente: quisiera que el señor diputado Durañona y Vedia aclare si cuando habla de defectos en la técnica legislativa al invitarse a las provincias se refiere exclusivamente al dictamen de minoría.

Sr. Presidente (Soria). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Durañona y Vedia. — Señor presidente: comprendo la pregunta que formula el señor diputado Gauna y me parece pertinente dado que esa invitación figura en los dos dictámenes,

Como el dictamen de mayoría entiende resolver en la mayor medida el problema, al hacer esta invitación a las provincias agrega "en lo que fuera pertinente", mientras que el dictamen de minoría, al estar constreñido únicamente a la ley de procedimientos o de arancel local que corresponde a la Capital, forzosamente debe decir: "Invítase a las provincias...". Pero esta invitación es de grado amplísimo, es decir que cada una de las provincias tendría que dictar una legislación interna sobre la materia, cosa que me parece que haría ilusorio llegar al objeto que la ley persigue. Por ello me he referido especialmente a la invitación a las provincias que hace el dictamen de minoría.

También debo señalar que el dictamen de mayoría contiene otras cuestiones que son ajenas al objeto esencial de la ley. Valdría la pena hacer un repaso de esto cuando se lleve a cabo la discusión en particular, porque existen otras leyes que hacen referencia a la actuación profesional de síndicos y de profesionales de la economía que se ve alterada por estas normas que van a dictarse. Me parece conveniente que la ley contenga únicamente aquello que está destinado a llenar su objeto y no otras cuestiones, y en este aspecto encuentro más congruente, como proyecto, el dictamen de minoría.

Al iniciar mi exposición he manifestado el propósito de no molestar por demasiado tiempo la atención de la Cámara y observo que no estoy cumpliendo adecuadamente mi palabra porque me he dejado llevar por el propio discurso, por lo cual pido disculpas a los señores diputados que se preocuparon por cuál sería la extensión de mi intervención.

El proyecto de ley en consideración merece una amplia discusión en particular. No sé si habrá llegado el momento de hacer lo que prescribe el texto de la nueva Constitución Nacional, en el sentido de enviar nuevamente a las comisiones especializadas este proyecto, a efectos de que se pueda encontrar la mejor definición en beneficio de la norma y de eventuales ulteriores declaraciones de inconstitucionalidad, que seguramente habrán de sobrevenir por las observaciones que con acierto se han hecho.

Considero que en el debate en particular tendremos el tiempo necesario de cambiar impresiones porque encuentro en el dictamen de minoría cosas muy lógicas, dignas de ser tenidas en cuenta y que indudablemente mejorarán el contenido de la legislación.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Estévez Boero. — Señor presidente: fijaré en breves términos la posición de nuestro bloque respecto del dictamen de mayoría recaído en el proyecto de ley en revisión sobre régimen regulatorio del costo de los procesos judiciales.

Nosotros no compartimos los conceptos filosóficos sobre los que se instrumentan estas modificaciones de la legislación vigente, que están inspiradas en una interpretación de la realidad nacional con la que estamos en desacuerdo.

Esta interpretación de la realidad nacional que a diario nos repiten los integrantes del equipo de Economía sostiene que los costos argentinos están determinados fundamentalmente por la legislación laboral —por ejemplo, de accidentes del trabajo—, y en este caso por el sistema de honorarios, por el modo de determinar los aranceles y por la vigencia de los aranceles provinciales. En otras iniciativas también se menciona el accionar de las cajas previsionales y de los colegios de profesionales.

Creo que a nadie escapa que el país ha vivido tiempos de gran esplendor y desarrollo con la plena vigencia de toda esta legislación a la que hoy se trata de responsabilizar por la crisis económico-social y por el creciente desempleo que sufre el país. Esto no es verdad; esta legislación ha sido respaldada con mucho más celo por otros poderes judiciales sin que se produjeran crisis. Esto ha sido parte de una concepción de país y una distribución de los ingresos que posibilitaron el engrandecimiento de nuestra vida económica y social. Por eso no podemos aceptar esta interpretación que encuentra en estas leyes, que se aplican incluso en forma sumamente retaceada, uno de los fundamentos del costo argentino, de la desocupación, del incesante cierre de las pequeñas y medianas empresas y de la permanente quiebra de los pequeños y medianos productores agropecuarios.

De este modo se coloca a los argentinos unos contra otros. Se pretende hacer creer al adquirente de una propiedad que la culpa de que no pueda acceder a una casa propia se debe a los aranceles elevados de un profesional y no a la situación económica existente. Con estos aranceles se ha accedido a la casa propia en el pasado. Hoy no pueden acceder a ese tipo de propiedad por el desequilibrio de las variables,

debido a esta concepción macroeconómica que existe en la cartera a cargo del doctor Cavallo.

Más allá de que existan problemas con respecto al arancelamiento de los profesionales y las escalas que se establecen, reconocemos que se puede efectuar una revisión y mejorar este sistema con un criterio equitativo, pero no podemos acompañar el dictamen de mayoría por la filosofía que contiene. Nosotros creemos esto desde un punto de vista global.

Desde un punto de vista puntual consideramos que con esta iniciativa se avanza sobre facultades que constitucionalmente corresponden a las provincias.

No se puede decir que con la sanción de este proyecto va a imperar el principio general de la voluntad de las partes, y que el Código Civil podrá reglar toda la legislación laboral, porque se trata de una concepción del siglo pasado.

Existe un derecho social que ha reconocido la existencia de la desigualdad en la disidencia, en la vida y en el poder de decisión de las partes, entre el débil y el poderoso. No podemos volver a una legislación de hace cien años que desconozca los avances que se han logrado en materia social. Entre ellos, figuran las leyes de aranceles que permiten que las diversas categorías de profesionales tengan un tratamiento justo y equitativo.

Esas leyes que establecen los aranceles también se vinculan con las normas relacionadas con la previsión social en las distintas provincias. También sobre esas leyes provinciales de previsión social se tienen puestos los ojos para entregar esos fondos a las administradoras privadas de jubilaciones y pensiones.

En consecuencia, con esta filosofía se está avanzando contra los derechos de los sectores más débiles, diciéndole al país que todo esto es lo que impide a la gente tener ocupación y una casa propia, lo que no es verdad. Aquí se pretende beneficiar exclusivamente a las grandes concentraciones de capital que quieren tratar con los profesionales al margen de los aranceles establecidos, pagándoles por hora, como ocurre en otros países del mundo como Estados Unidos.

Todas estas cuestiones deberían ser discutidas más abiertamente, sin que se produjeran alteraciones que son fundamentales cuando se modifica la legislación existente.

Por las razones expuestas, en nombre del interbloque Alternativa Federal adelanto que votaremos negativamente el dictamen de la mayoría.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.

Sr. Garay. — Señor presidente: seré muy breve porque aquí ya se han expresado una serie de críticas que no vale la pena reiterar y porque estoy afectado por una disfonía.

Es evidente que se ha pretendido avanzar con un disfraz del artículo 505 del Código Civil y de otros artículos de los códigos de fondo sobre facultades que son propias de las provincias.

Lo que se ha sostenido en la Constitución en cuanto a que cada provincia conserva todo el poder no delegado a la Nación al tiempo de su incorporación ha constituido un principio básico que ha sido establecido por las provincias originarias en aquel tratado que se llamó Constitución de 1853.

También en aquel artículo 67, inciso 11 — hoy artículo 75, inciso 12 de la nueva Constitución —, se faculta específicamente al Congreso a dictar los códigos de fondo, con lo que se establece una excepción al principio de preservación de los poderes provinciales en manos de las provincias originarias. Sin duda, se distorsiona y transgrede la Constitución, como aquí bien se ha expresado.

Al artículo 505 del Código Civil, que se refiere a una cuestión de fondo, se le agrega simplemente una de las posibles consecuencias, cual es el incumplimiento y su derivación en pleitos o arbitrajes. Incluso las pautas que allí se fijan son absolutamente oscuras, y hasta podría decir que en algunos casos son ininteligibles; a raíz de ellas, seguramente los distintos magistrados emitirán fallos contradictorios que en definitiva terminarán en otras instancias judiciales, que con toda seguridad generarán mayores gastos causídicos.

Como se ha expresado desde un primer momento en la Comisión de Justicia, es cierto que aquí se consideran las costas y los honorarios profesionales, y que en relación con las primeras existe una potestad elemental provincial cual es la facultad de aplicar impuestos o tasas por actuación de justicia; pero mediante la iniciativa en tratamiento se está fijando un tope con respecto a facultades que son originarias de las provincias y que no han sido delegadas.

También es oscura la redacción del proyecto cuando establece que si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales superaran el 25 por ciento del monto de la sentencia, el juez procederá a prorratar los montos entre los beneficiarios. Además se indica que no se tendrá en cuenta la regulación de honorarios de los profesionales que hubieren representado a la parte conde-

nada en costas. Así sucesivamente podríamos seguir citando otros vicios que contiene el proyecto.

Nos estamos acostumbrando a transgredir la Constitución; nos anestesiarnos y perdemos la sensibilidad democrática y republicana ante hechos que lastiman la convivencia dentro del estado de derecho.

Es así que en el proyecto de ley sobre el tema previsional, que mañana será debatido en la Comisión de Justicia, observamos que se establece que los fallos de la Corte en materia previsional son obligatorios para todos los tribunales del país. Es decir que por esta vía se está otorgando *erga omnes* a un órgano jurisdiccional una potestad que es eminentemente legislativa. Por este camino vamos a romper el esquema que nos ha generado la libertad, que nos ha posibilitado vivir con dignidad en el marco de la Constitución.

No es la nueva Constitución la que posibilita esta transgresión, porque siempre hubo transgresiones. Es cierto que en normas tales como la ley de quiebras y otras se establecen pautas relativas al procedimiento en relación a cuestiones que son eminentemente provinciales; pero un precedente transgresor no sirve para justificar una nueva legislación que no hace otra cosa que volver a transgredir la Constitución de la Nación.

Lamento que el bloque de la Unión Cívica Radical, que está en contra de este proyecto, haya concedido los dos tercios de votos a la bancada oficialista para que se pueda tratar sobre tablas este proyecto que, si bien tiene dictamen de comisión, éste no constituye lo que técnicamente se conoce como tal pues no ha vencido el término del artículo 95 del Reglamento de esta Honorable Cámara.

Lamento que se haya posibilitado este tratamiento y ojalá que se reflexione sobre esta relación Nación-provincias y no se vuelva a avanzar sobre estas facultades que son elementales.

Aquí voy a detener mi exposición porque las otras críticas han sido muy bien expresadas por otros señores diputados que me precedieron en el uso de la palabra.

Señalo simplemente que el bloque Liberal va a votar, como ya lo expresó en la Comisión de Justicia con su disidencia total, en contra de este proyecto.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Fernández Gill. — Señor presidente: el bloque del MODIN comparte, por su seriedad y profundidad, las expresiones vertidas en el

dictamen de minoría por el señor diputado Trettel Meyer. Pero nosotros queremos agregar algunas consideraciones a lo ya expresado. El ministro de Economía acostumbra a decir que todos los profesionales son poco serios. En el caso concreto de los abogados suele decir que van a los tribunales nada más que para fomentar la industria del juicio; el ministro olvida que si hay juicio contra el Estado la única responsabilidad le cabe al propio Estado.

Evidentemente hay una gran confusión entre lo que es hoy el estado de derecho y el Estado absolutista de Luis XIV. El Estado debe pagar sus deudas y, si no lo hace, debe someterse a las consecuencias de sus actos como cualquier otra persona jurídica.

A lo largo de estos años hemos recibido distintos informes de asociaciones profesionales, coincidentes todos en oponerse terminantemente, por cuestiones de orden jurídico y económico, con la base de lo que denominamos justo y equitativo.

Este proyecto sancionado por el Senado atenta, según nuestro criterio, contra la esencia de las profesiones liberales y contra los intereses del pueblo argentino, que no es precisamente el que se resigna frente a la injusticia pues tiene un acabado sentido del concepto de dignidad.

Este proyecto es un monumento al descreimiento en relación con las instituciones legales y un instrumento que sin ninguna duda facilitará la corrupción de los jueces en la medida en que se les otorgue un alto grado de discrecionalidad cuando se trate de juicios por montos elevados.

Nos oponemos a la conservación del criterio objetivo de regulación porque ello no haría otra cosa que aumentar la sensación de descreimiento que lamentablemente desde hace varios años viene ocurriendo en relación con la Justicia argentina.

Cuando la Justicia depende de un hombre y no de una ley, el riesgo de sufrir injusticias aumenta evidentemente para aquellos litigantes que reúnan la condición de honestidad. Eliminar los mínimos obligatorios implica directamente desprestigiar la prestación del servicio de Justicia. Eliminar los mínimos de la ley de aranceles significa convertir al mercado de servicios en una actividad comercial que sin duda irá en detrimento de esos servicios.

Los honorarios más baratos llevarán a circunstancias límite que a veces pueden provocar situaciones irreparables. Pensemos, por ejemplo, en el caso de un médico que, por no contar con elementos modernos, su falta de capacidad económica lo puede llevar a cometer

errores que, como decía, pueden ser irreparables con referencia a los seres humanos. Lo mismo puede ocurrir, aunque con resultados totalmente distintos —no físicos—, con los abogados que no cuenten con un sistema moderno computarizado, con base de datos actualizados; tampoco podrán prestar el servicio que corresponda.

Por eso, esto nos lleva a aumentar las brechas de una manera desmedida: tendremos servicios para los pobres y para los ricos. Seguramente, los que menos tienen serán los más perjudicados, por tener que caer en profesionales inescrupulosos, que bastardean las profesiones. Los buenos profesionales no podrán subsistir en un régimen de proletarización o depreciación, como consecuencia del barateo.

Con el proyecto de Cavallo se logrará que desaparezcan los profesionales liberales, que hacen honor a su profesión y que siempre tratan de prestar el mejor servicio, con la expectativa que les proporciona tener pocos buenos juicios.

Sin duda, al doctor Cavallo le molestan los buenos abogados, porque conoce las actitudes intempestivas que lo llevan a no cumplir las obligaciones a cargo de su cartera. Ello lo induce a desmoralizar a los potenciales afectados para que nadie reclame en la Justicia lo que en derecho le corresponde.

Nuevamente estamos frente a un hecho tendiente a convertir un acto humano, de naturaleza predominantemente intelectual, en un factor del mercado, como si se tratara de cosas u objetos.

Como bien ha sostenido el Colegio Público de Abogados, un buen abogado es un límite contra la prepotencia del poder. También hemos recogido como inquietud que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal solicita el rechazo de este proyecto, sin perjuicio de lo cual se acepta un tope máximo que prevenga abusos, con el deber de que el juez lo fundamente en forma idónea. También en materia de sucesiones y de sociedad conyugal apoya la introducción de alguna modificación para resguardar lo que sea bien de familia o haga sus veces, preservando el honorario del profesional actuante.

Esta norma también modifica incumbencias profesionales, lo que no hace más que complicar el tema.

Por las razones expuestas, el bloque del MODIN se opone totalmente a la aprobación de la iniciativa en consideración.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: está en consideración el Orden del Día N° 1.071, que contiene el proyecto de ley de regulación de las costas judiciales. Tenemos serios reparos con el dictamen de mayoría, que podemos sintetizar en tres aspectos.

En primer lugar, observamos la inadecuada e incomprensible ruptura que el proyecto dispone en materia de incumbencias profesionales para el ejercicio de la sindicatura concursal.

En segundo lugar, existe un tema muy debatido, que es el avance sobre las facultades no delegadas y que constitucionalmente corresponden a las provincias.

En tercer término, señalamos la inconveniencia del mecanismo establecido para la adecuación de los honorarios profesionales regulados judicialmente, a fin de evitar posibles excesos.

Luego de este año que voy a cumplir como legislador, me voy acostumbrando a aceptar la mala regla de juego que significa exponer únicamente ante aquellos estoicos legisladores que por una cuestión de respeto y consideración se quedan en el recinto. Seguramente a pesar de esta descarga a tierra que estoy haciendo, esta situación no se va a modificar en absoluto: incluso una vez cumplido mi mandato.

Me pregunto para qué es el debate y cuál es el objeto que lleva a que cada uno de los legisladores exponga y se preocupe por los temas que se someten a la consideración del cuerpo. ¿Alguien entenderá las razones que vamos a explicitar y que hemos señalado en el término reglamentario que aún no se ha cumplido del artículo 95, a fin de hacer conocer nuestras observaciones sobre una iniciativa de tanta trascendencia, cuyo tratamiento abruptamente nos fue notificado durante la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria?

Incluso cuando planteamos nuestras inquietudes nos explicaron que debíamos votar este dictamen tal cual está redactado, porque ya ha sido sancionado por el Senado y no podríamos convertir en ley la iniciativa si le introdujéramos modificaciones, ya que en tal caso tendría que volver a la Cámara de origen.

Me pregunto si esto es serio; lo digo honestamente. ¿Vale la pena que hagamos este esfuerzo de quedarnos? ¿No sería más prudente —como se ha dicho— solicitar la inserción de nuestras argumentaciones y que aquellos que tengan interés en conocerlas se enteren por *fax*?

Con relación al tema que nos ocupa, creo que todos sabemos de la existencia de casos ampliamente difundidos en los que se han fijado regulaciones manifiestamente excesivas e inclu-

so que en la mayoría de ellos se han producido anomalías durante el proceso que han llevado a sentencias desproporcionadas e ilegítimas, o bien falencias lamentables debidas a la mala defensa de los intereses de los demandados. Este último caso es manifiesto en aquellas oportunidades en donde ha estado involucrado el Estado nacional o una provincia.

Sin embargo, no hay duda de que este contexto merecía una investigación más profunda para procurar un instrumento que lograra la adecuación de las normas vigentes a una nueva realidad en la que se ponderasen y equilibrasen mejor los derechos en juego.

No tengo un gran entusiasmo por exponer, señor presidente. Por lo tanto, sólo me voy a referir a uno de los aspectos que he mencionado. Oportunamente pediré la inserción de una parte de mi discurso y, si aquellos que están ocupados fuera del recinto vuelven, durante el tratamiento en particular continuaré formulando observaciones.

Sin embargo, no puedo dejar de aludir a un aspecto muy importante que se vincula con el carácter ajeno de un tema respecto del objetivo de este proyecto de ley. Esta iniciativa tiene un objetivo central y excluyente, que es la reducción de los costos judiciales en materia de honorarios profesionales. Desde esta óptica, la razón no alcanza a comprender el modo en que dicho costo será mayor o menor si el síndico concursal es abogado o contador público. Del articulado del proyecto no se desprende que cuando el síndico del concurso sea un abogado, tenga que regularse un honorario distinto a si fuera contador público. De manera que la calidad profesional del funcionario interviniente en nada incide sobre el costo judicial del proceso.

Desde tal conclusión, evidentemente es notorio que la reforma proyectada es en este punto absolutamente extraña a los objetivos buscados, al menos en cuanto a los explícitos, y por ello no guarda la más mínima relación y coherencia con el resto del articulado.

Hay algo que también nos llama mucho la atención con respecto a los fundamentos explícitos de esta iniciativa. El mensaje del Poder Ejecutivo no tiene una sola letra que intente explicar el objeto de esta reforma. Esta falta absoluta de fundamentación se une al carácter de ajeno antes expuesto y crea realmente un vacío extremo de racionalidad en la propuesta de esta reforma legislativa.

He seguido atentamente las distintas conferencias y exposiciones que dieron los abogados

contratados por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos para explicar a lo largo y ancho del país la reforma de la ley concursal que está en tratamiento en el Senado de la Nación.

En este proyecto también se incluyen modificaciones en cuanto a la figura de la sindicatura concursal. Hemos tomado la precaución de averiguar cuáles son los fundamentos que inducen a esta innovación, pero las respuestas no pueden ser menos precisas. Alguien contestó por ahí que se trata de una decisión política del Ministerio de Economía. Otro manifestó no tener nada que ver en la redacción de esta parte de la propuesta, por tratarse de un criterio proveniente del Poder Ejecutivo.

Es decir que ni en los fundamentos del proyecto ni en los debates de la comisión pertinente ni en la exposición del señor miembro informante de la mayoría podemos encontrar una sola motivación que justifique las modificaciones previstas por la norma en consideración.

Creo que es necesario que nos expliquen concretamente cuáles son las verdaderas razones que se tienen para proponer estas modificaciones y que en este momento se encuentran celosamente escondidas. Repito que en la norma que está en consideración en el Senado se está tratando de instrumentar una reforma en esta materia. Al mismo tiempo, en este proyecto sobre costas judiciales se introduce un tema que también es ajeno a la cuestión de fondo. ¿Se trata de una nueva modalidad legislativa la de enviar dos proyectos simultáneos para modificar un instituto cuya tradición data de 1902? ¿Se mejora la forma de legislar? Me animo a responder que no es así.

Resultaría más lógico analizar este tema cuando se trate la ley fundamental, que es la Ley de Concursos. Seguramente, ése será el momento para abordar estos temas referidos a este instituto en lugar de hacerlo cuando se considera un proyecto que nada tiene que ver con esa cuestión.

En el proyecto de ley concursal se dan una serie de argumentaciones que difieren sustancialmente del procedimiento que se está indicando en la figura del síndico concursal prevista en el presente proyecto. Tienen en común un solo elemento, cual es la incorporación de la figura del abogado para poder ejercer esta importante tarea. Esta es la única característica en común que he encontrado entre ambos proyectos.

Después de analizar toda la doctrina, los despachos producidos en los más importantes con-

gresos de derecho comercial y de advertir que ningún juriconsulto prestigioso —ni de los otros— ha planteado la necesidad de esta reforma, no entiendo por qué aparece simultáneamente en estos dos proyectos con tanta insistencia, cuando nadie la ha solicitado.

Por otra parte, dicha reforma tiene vinculación con las leyes referidas al ejercicio profesional. En este sentido, el Estado trata de tutelar las responsabilidades que se le asignan a cada una de las profesiones. Por ello para introducir estas modificaciones correspondería cambiar la curricula en la carrera de los profesionales del derecho o las tareas que deberá efectuar el síndico concursal.

No he de reiterar conceptos relacionados con los dos puntos sobre los que aún no he expuesto. No tengo ninguna duda respecto de cuáles son las facultades que no han delegado las provincias a la Nación. Afortunadamente he comprendido con claridad que no es precisamente la materia procesal la que se puede dictar en la legislación de fondo, y esto es un avance más sobre las provincias.

Entiendo que el mecanismo que se ha previsto en este proyecto de ley no es el más adecuado para poder solucionar los problemas de fondo que se han querido prever al modificar la estructura arancelaria.

Atento a la necesidad manifestada por la bancada oficialista en el sentido de que debemos votar sí o si este despacho de mayoría, y con la convicción más absoluta de que de nada sirve el esfuerzo que podamos hacer al exponer nuestras argumentaciones, voy a solicitar que se inserten en el Diario de Sesiones las observaciones que hemos planteado al dictamen de mayoría, como parte de mi discurso. Reiterando nuestro rechazo terminante al dictamen en consideración, doy por concluida mi exposición.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Orquín. — Señor presidente: luego de las exposiciones de los señores diputados que me han precedido en el uso de la palabra y de la demostración acabada de que este proyecto no solamente es inconveniente sino también inconstitucional, tal como está redactado, voy a manifestar unas palabras para reafirmar estos conceptos e introducir algún nuevo argumento respecto de la inconstitucionalidad de la norma con la esperanza de que lo que estamos diciendo sirva a los jueces para convertir en su mo-

mento en letra muerta esta ley y declarar su inconstitucionalidad en el caso de que ella fuera sancionada a pesar de nuestros esfuerzos.

El Poder Ejecutivo se equivoca con estos proyectos de ley. Seguramente esta iniciativa va a correr la misma suerte en la Justicia que ya están corriendo las leyes previsionales. Afortunadamente, en nuestro país todavía no se pueden vulnerar derechos ni ir en contra de la Constitución en forma gratuita.

Esta norma es inconstitucional porque está haciendo uso de prerrogativas que el Congreso de la Nación no tiene. Como diputado de una provincia del interior niego a este Congreso facultades para legislar en esta materia. Hasta el señor diputado Trettel Meyer ha traído abundante jurisprudencia en el sentido de que estas son normas procesales no delegadas al poder federal, y por lo tanto podríamos hacer este tipo de limitaciones para los tribunales federales y de la ciudad de Buenos Aires, pero no estamos habilitados ni tenemos facultades para hacerlo respecto de los honorarios o regulaciones en los tribunales locales del interior del país. Si esta norma es aprobada, desde este punto de vista sería inconstitucional.

También es inconstitucional porque este proyecto de ley no se limita solamente al tema de los honorarios; no habla únicamente de ese asunto sino de las costas, que incluyen el impuesto de justicia. Entonces, está atentando contra el poder autónomo de las provincias de fijar sus propios impuestos. Creo que cuando llegue el momento de votar, los señores legisladores del interior del país van a tener que pensar muy bien en esta situación: aquí no se están limitando sólo los honorarios —punto sobre el que podríamos llegar a un acuerdo pues sabemos que en esta materia se han cometido excesos— sino también el poder de las provincias de establecer sus propios impuestos de justicia, porque se establece que las costas, incluidos los honorarios, no pueden superar el 25 por ciento.

Se acude a la modificación del Código Civil como pretensión de validez de una norma en todo el territorio de la República. Los jueces no van a titubear un solo momento en declarar esta norma inconstitucional. Así lo espero, por lo menos. Este es un simple pretexto que a medida que pasa el tiempo el Poder Ejecutivo va exagerando o magnificando.

El proyecto de ley de solidaridad provisional que tan conflictivamente estamos por tratar lleva este tipo de honorarios del 25 por ciento al

10 por ciento, de modo que se ve que el ensañamiento del Poder Ejecutivo con los profesionales no reconoce límites.

Hace unos momentos el señor diputado Balter se preguntaba para qué estamos hablando delante de 55 diputados. En realidad, como la última vez que hablé lo hice delante de cuatro, a los 55 que ahora están presentes les agradezco mucho que me escuchen. De todos modos mi mensaje no está destinado a una bancada a la que, por supuesto, no voy a poder convencer, ni a los diputados de las provincias que no están presentes y que por lo tanto no me pueden escuchar, sino que está dirigido en el tiempo a los jueces, que espero que en su momento declaren la inconstitucionalidad de esta ley. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Soria).— Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Bracchi.— Señor presidente: muchos se han preguntado cuál es el motivo de este proyecto de ley, pero debemos recabar en los antecedentes lógicos de una sociedad que la ley no deviene generalmente como precursora de situaciones sino que va detrás de las aspiraciones, necesidades y situaciones de un pueblo para tratar de solucionar sus problemas.

¿Qué diríamos de un país donde los costos judiciales rondan en el 50 por ciento del valor de los bienes objeto de las demandas, de lo que pecuniariamente puede representarse en moneda en los juicios de valor? Estos costos oscilan entre el 47 y el 50 por ciento, sin considerar que en muchas ocasiones hay pagos de cuota litis por un valor del 20 al 30 por ciento.

¿Qué diríamos, entonces, sino que esto tiene a nivel judicial un sentido expropiatorio para una persona con escasos bienes que está litigando por alguno de ellos y se ve privada nada menos que del 50 por ciento de su valor cuando termina el juicio, si es que lo pierde? Esta es una realidad que no podemos olvidar; debemos observar con prontitud esta verdad.

¿Qué diríamos de las demandas entabladas contra el Estado que también van a significar para las arcas del país otro 47 o 50 por ciento por gastos judiciales?

¿Qué diríamos de las regulaciones monstruosas que a veces se hacen por uno o dos escritos —que realmente han provocado el asombro nacional y extranjero— si no podemos efectuar una modificación de modo tal que nuestro país sea creíble? Los costos de Justicia no sólo van a influir en el orden interno sino también en el internacional en lo que corresponde al comercio, como en el caso del Mercosur. ¿Qué diríamos si como legisladores no tuviéramos la posibili-

dad de llevar esta modificación adelante, más allá de nuestra calidad de abogados, la cual no se nos exige para ser diputados, siendo que debemos responder a las necesidades de una encrucijada que realmente tenemos que solucionar?

¿Qué diríamos si no pudiéramos dar un mejor acceso a la Justicia porque ella está vedando una mejor participación popular cuando los costos judiciales rondan el 50 por ciento? Evidentemente, tenemos que establecer una limitación a esto.

El proyecto de ley en consideración es perfectible —como toda iniciativa humana—, pero lleva insito el espíritu de buscar una solución a los problemas que estamos viviendo.

En principio, debo señalar que es atinado incorporar esta norma en el artículo 505 del Código Civil referido a las obligaciones. En verdad Vélez Sársfield —nuestro legislador prominente—, separándose del derecho francés había contemplado todo tipo de obligaciones y todas las causas de las obligaciones que devienen de diferentes aspectos del derecho: las convenciones, los delitos, los cuasidelitos, la ley. Fue así que el autor de nuestro Código comenzó a construir un camino para poder arribar a la solución que propiciamos.

Seguramente que la cuestión que dimana de modo directo de la significación de las costas en un juicio es, según algún concepto tal vez antiguo, una sanción de pago a quien ha promovido el juicio sin derecho, o veces con equívoco pero fundamentalmente con alguna razón que creía lo así.

Incorporar esto en este artículo es la única manera de dar legitimidad a este sistema que se pretende establecer, que de todas maneras no es ajeno al propio Código Civil. Afirmo esto porque de cualquier modo dimana de la ley, que es una de las fuentes de las obligaciones. La ley es lo que realmente se interpreta en la justicia.

Por otra parte, hay teorías procesalistas que sostienen que el cierre de la demanda con contestación de demanda significa una especie de contrato judicial en el que las partes ponen una situación a resolución del juez. Entonces es evidente que con esta iniciativa estamos bien encaminados en ubicarla técnicamente dentro de las obligaciones, porque es una obligación hacer pagar las costas al vencido. Por lo expuesto, interpretamos que el proyecto de ley que estamos propiciando —que ya cuenta con sanción del Honorable Senado— tiene virtualidad jurídica suficiente.

Pero también han ocurrido otros acontecimientos porque realmente otra sería la circunstancia si los jueces hubieran contemplado y aceptado la ley, haciendo de ella una norma fundamental para resolver sus litigios sin obstrucciones ni desviaciones.

¿Por qué no se ha aplicado en nuestra justicia el artículo 1.671 del Código Civil, que contiene un antiguo concepto sobre el abuso del derecho, cuando dice: "La ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos. Se considerará tal al que contrarie los fines que aquélla tuvo en mira al reconocerlos o al que exceda los límites impuestos por la buena fe, la moral y las buenas costumbres."? ¿Por qué no se cumplieron tampoco las disposiciones de muchas leyes sobre honorarios profesionales que sostenían que había que considerar el monto del juicio, la seriedad del trabajo, la profundidad jurídica del abogado o del interviniente que había hecho uso de ese derecho, para poder merituar mejor la función y la regulación de honorarios? ¿Por qué en 1984 se varió la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando los precedentes establecían que bien podían perforarse los mínimos cuando el juez entendía que era ilegítima una regulación, por el hecho de que no tenía relación con las circunstancias fácticas y la realidad económica ni con el trabajo jurídico que se había realizado?

Tal vez un señor diputado de la Unión Cívica Radical, que fue procurador general de la Nación, podrá recordarnos que elaboró un dictamen en el que se opuso a esa resolución que luego fue aprobada por la Corte Suprema de Justicia. Y esto lo hizo con criterio, porque estaba defendiendo el derecho de perforar los mínimos cuando esos mínimos significaran una regulación monstruosa que fuese inconcebible.

Pero, fundamentalmente, se hacen cargos de inconstitucionalidad. ¿Acaso, en la Constitución Nacional no se acuerda al Congreso de la Nación la facultad de dictar los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales, según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones? Esto tiene su contrapartida, porque no se trata sólo de una delegación, ya que cuando en la Constitución se habla de los gobiernos de provincia se repite el concepto por el cual se prohíbe a los estados provinciales ejercer el poder delegado a la Nación, manifestando que no pueden dictar

los códigos Civil, Comercial, Penal, de Minería y del Trabajo y Seguridad Social. Entonces, ¿lo que está establecido en esos códigos constituye algo que forme parte de una ley nacional o local?

Evidentemente, la conclusión definitiva la obtenemos en la misma Constitución Nacional, que distingue que la ley de fondo es de aplicación provincial o federal según las circunstancias. Tampoco es en vano manifestar que en muchas ocasiones nuestras leyes nacionales se prestan a diferentes formas de interpretación. Algo parecido ha ocurrido con la Constitución Nacional cuando habla de la elección del presidente y de la doble vuelta.

Aquí pueden despejarse las dudas, porque interpreto que esta legislación que estamos promoviendo no ataca a la Constitución ni a las provincias, ya que existe un artículo en el que se manifiesta que pueden dar su conformidad u oponerse en cierta circunstancia. Entonces el federalismo todavía está pendiente en cuanto a la decisión que adopten las provincias. Además, existe una Corte Suprema de Justicia que puede establecer la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma.

El tema de las regulaciones judiciales no es una cuestión que en su generalidad pueda proponerse como si fuera un mero asunto procesal, porque este proyecto de ley establece una modificación de las normas, actuando el Congreso de la Nación como órgano legislativo de la Capital Federal y de los territorios nacionales cuando los hubiere. Entonces, no existe ninguna interpretación equívoca. Tampoco existe cuando se modifica la ley de contrato de trabajo, porque está contemplado dentro de una ley general.

No hay interpretación equívoca por los argumentos que se han dado, que no dejan que los jueces provinciales interpreten la ley y los obliga a fundamentar con su voto el criterio seguido cuando perforan los mínimos. Es decir, que tendrán que manifestar por qué motivo y por qué circunstancia han tenido que rebajar los honorarios por debajo del mínimo.

Entonces, estamos dentro de un plexo normativo, con todas sus particularidades. En especial, se ha creado una nueva fuente de las obligaciones, que si bien ya existía, a partir de ahora contará con una profundidad jurídica más mediana en lo que se refiere a las costas como una imposición al vencido; de lo contrario, estaríamos legislando en torno de una ley de honorarios, con lo cual sí tendríamos otros inconvenientes.

El enganche de toda esta situación jurídica se produce fundamentalmente mediante su incorporación en el Código Civil —así está dispuesto—, en la perforación de los mínimos y no en la imposición a los jueces en cuanto a qué es lo que deben regular. Los magistrados siempre dispondrán de su facultad regulatoria. Además, estas disposiciones no perturbarán a las legislaciones locales, aunque no ha faltado un jurista —como el caso de Bustamante, que fuera citado por el señor senador Aguirre Lanari, miembro informante en el Senado de la Nación— que manifestó que las provincias se han agenciado de una facultad de orden nacional.

Sin llegar a esos extremos, sinceramente no entiendo por qué se preconiza la inconstitucionalidad de la norma proyectada. Tampoco comprendo por qué no queremos dar solución a cuestiones que son prioritarias para nuestro país, cual es el problema de las altas costas judiciales, que más allá de que lo diga el ministro de Economía o quien fuere, son realidades palpables de la Nación; tenemos que modificar un costo judicial que es del 50 por ciento.

Para ello se establece en la regulación un tope máximo —llamémoslo así—, que como bien se ha reconocido en este recinto ya estaba contemplado en la ley de concursos y quiebras, la ley de bancarrotas —según dice la Constitución—, y no afectaba a las jurisdicciones provinciales. Que yo recuerde, al respecto no ha habido ningún caso de inconstitucionalidad, a pesar de la prolongada vigencia de la ley 19.531.

De esta manera, el proyecto de ley está reivindicando la legislación en materia nacional contenida en el Código Civil y la ley de bancarrotas. Ello implica también una regulación proporcionada al trabajo y a los montos, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13, que es una norma de contenido ético, pues se pretendían regulaciones que fueran proporcionales al monto de la demanda, que a veces representa dos o tres veces el valor real. Entonces, llegábamos al valor realizado de los bienes —como dice la ley concursal— o utilizábamos otros parámetros que significaran la virtualidad, la realidad palpitante y viviente, con el objeto de poder sancionar este proyecto de ley; con abogados o sin ellos, con legisladores preocupados por su país y la solución de sus problemas, el cambio de sus estructuras económicas y jurídicas. Esta es la obra que pretendemos estar realizando.

Para finalizar, permitiendo así que más rápidamente podamos dilucidar estas cuestiones mediante la votación del proyecto, deseo exhortar a los señores diputados a que se pro-

nuncien afirmativamente en relación con la iniciativa en tratamiento, que si bien no será un modelo de la perfección —pues ésta no existe en la naturaleza humana—, es una forma de dar solución a una serie de problemas dentro de este laberinto de situaciones judiciales injustas, de regulaciones tremendamente superiores a los niveles normales y de “manga ancha” —como se dice en la jerga judicial— que tienen algunos jueces para las regulaciones, olvidándose ellos que así están perjudicando el patrimonio de muchos argentinos. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Muñoz. — Señor presidente...

Sr. Balter. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?

Sr. Muñoz. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Soria). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.

Sr. Balter. — Señor presidente: agradezco al señor diputado la posibilidad de esta interrupción y quisiera preguntar al colega preopinante si hay posibilidad de que me explique —he seguido su erudita exposición y esto que le estoy pidiendo es con toda cordialidad, ya que comparto gran cantidad de sus fundamentos— en qué abaratan el costo judicial las modificaciones que se imponen en este articulado.

¿Cómo vamos a hacer con esta modificación de la figura del síndico concursal. No quiero entrar a repetir argumentos como el del 50 por ciento de las costas, las sentencias exorbitantes de fijación de honorarios, la preocupación que tenemos los legisladores por modificar este sistema tan injusto y la proporción de lo que se va a llevar el que demanda.

Quisiera que algún miembro de la comisión me aclare estas cosas y me responda qué tiene que ver toda esta modificación con el cambio de la figura del síndico concursal.

Sr. Presidente (Soria). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Muñoz. — Señor presidente: yo tenía alguna apreciación personal sobre este proyecto y después de escuchar la palabra del representante del bloque mayoritario estoy convencido de que esta reforma peca de falsedad ideológica porque, evidentemente, detrás de una pretendida reforma arancelaria —coincido que es inconstitucional porque las leyes de aranceles profesionales son privativas exclusivamente de las jurisdicciones provinciales— se está poniendo solapadamente —y así lo dijo muy bien el señor diputado Balter en su exposición— a la figura del abogado como síndico en los concursos comerciales.

Entonces, en aras de modificar aranceles, se entran a modificar trasnochadamente incumbencias, lesionando los privilegios de las universidades, de las facultades, de los consejos profesionales, y sobre todo el esfuerzo profesional de aquellos que se especializaron.

Decía el señor diputado Bracchi del largo transitar de la ley 19.551. Yo puedo dar fe de ello porque participé como representante de mi provincia en el análisis de la iniciativa, y recordarán ustedes que esa fue una norma que aunque no tuvo sanción parlamentaria posee un gran mérito, ya que autores como Alegría, Fargosi y Quintana recorrieron el país y presentaron el proyecto en cuestión en todos los tribunales de justicia, en todas las cámaras de comercio y en todos los consejos profesionales. Debe haber sido tal vez la ley más popularmente debatida en esta República.

En aquel momento, a nadie se le ocurrió pensar que podíamos variar la tesis de Ramón Castillo en el Senado de la Nación, cuando él, que es el padre y autor de la vieja ley 11.719, en un momento dado, defendió la calidad del contador público para actuar como síndico. Un senador de la oposición dijo que ello no era necesario, basándose en el principio del viejo Código, según el cual el comerciante de legítimo abono podía ejercer la sindicatura. Y Castillo, que era profesor de la Facultad de Ciencias Económicas dijo: ¿para qué hemos creado una carrera especializada en economía? ¿para qué les damos la facultad de analizar estados patrimoniales? ¿para qué les otorgamos la posibilidad de que estudien cómo se maneja la hacienda, si cuando hay que aplicar una ley fundamental que integra el Código de Comercio permitimos que los legos cumplan esa labor?

A alguien se le ocurrió redactar trasnochadamente un proyecto como éste. A su vez, mediante alguna reforma —fueron muchas— a la ley de concursos, se creó una obligación profesional, que debe ser uno de los más exquisitos requisitos para alguien que ejerce una actividad. Me refiero a los posgrados que permiten la especialización en sindicaturas concursales, que en el país cuentan con planes de estudio que abarcan de cuatro a doce materias, como el que se dicta en la Facultad de Ciencias Económicas de Mendoza.

Me pregunto para qué se crean especializaciones, si a su vez los que no sean especialistas van a poder actuar como síndicos. Aquí voy a mencionar una perla que contiene el artículo 4º, cuando pretende sustituir de aparo el artículo

277 de la ley 19.551. Allí se dice: "La sindicatura será ejercida por contadores públicos diplomados y abogados..." Que me perdonen los abogados, pero no sabía que existían abogados curanderos en la República. A su vez quiero aclarar que la norma arancelaria concursal hace mucho que no se aplica sobre el monto del capital líquido, sino sobre el importe total verificado.

Hay que analizar si todas las incumbencias que establece explícitamente la ley de concursos como facultades del síndico van a quedar automáticamente derogadas. ¿Vamos a exigir a los abogados que cumplan con todas las incumbencias?

Personalmente, después de haber sido vicepresidente fundador de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas y luego de haber ejercido durante 34 años como profesor de la materia concursal en el nordeste de nuestro país, siempre sostuve que el síndico contador necesitaba procesalmente la asistencia obligatoria de un abogado, pero me parece monstruoso que un abogado pueda por sí —conociendo nada más las normas procesales— opinar sobre las haciendas pública y privada.

Reitero lo que expresaba el diputado Balter. ¿En qué se abarata el juicio? ¿En qué se disminuye el problema arancelario? Esto ha sido redactado trasnochadamente y no como consecuencia de un desliz. Se lo ha hecho con toda intencionalidad, porque hace mucho tiempo que alguien está intentando avasallar las incumbencias de una profesión con más de cien años en la República.

Vengo a defender mi posición desde lo más profundo de mis convicciones y desde mis 40 años de egresado como contador. También vengo a defender algo muy importante, como la universidad argentina. Esto está dirigido a todos los profesionales, a todos los empresarios, a todos los sindicalistas y a todos los legos que se sientan en este recinto. Evidentemente, en el exacto momento en que empiecen a caer las incumbencias que las organizaciones fundaméntales de la educación argentina —como son las universidades— están otorgando, en el momento en que se restrinja la facultad de los consejos de controlar ética y arancelariamente a sus afiliados, habrá empezado a aplicarse en la República un rasero que en vez de reglar los honorarios estará minimizando la capacidad intelectual de todos los profesionales.

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.

Sr. Pernasetti. — Señor presidente: de acuerdo con lo que acabo de escuchar del señor diputado Muñoz parecería que el ministro Cavallo pretende calmarnos con las ventajas que implica para el ejercicio de nuestra profesión el proyecto de ley que estamos considerando, al ampliar la competencia a los abogados para actuar como síndicos del concurso.

Sostengo que los abogados no queremos invadir incumbencias que no nos corresponden. No estamos capacitados para ser síndicos y como abogado militante, sin pretender convertirme en defensor gremial o corporativo, me veo en la obligación de dar mi opinión sobre esta iniciativa que de ningún modo va a servir para abaratar los costos judiciales y que probablemente dé lugar a que quienes la voten favorablemente sean responsables del incremento de la litigiosidad en el país, porque la norma será tachada de inconstitucional en todos los tribunales de la Nación.

He escuchado con atención las explicaciones brindadas por el miembro informante de la mayoría y por el señor diputado Bracchi en cuanto a que consideraban acertada la metodología usada para tratar el tema de los honorarios en el Código Civil.

Me siento realmente asombrado y alarmado. Hace un año que soy legislador y debo haber votado seis o siete iniciativas reformadoras del Código Civil. A este paso lo vamos a convertir en una especie de circular del Banco Central, porque será muy difícil comprender su lectura.

El año pasado esta Cámara sancionó un proyecto de ley de unificación de la legislación civil y comercial, la semana pasada sancionó una modificación al Código Civil sobre el tema de la vivienda, y ahora se pretende legislar nuevamente para modificar el Código Civil.

¿Qué sentido tiene esto? Parece que cuando Cavallo tiene un problema, lo primero que se le ocurre para solucionarlo es modificar alguna norma del Código Civil, pero con eso no se va a ganar nada.

Ubicar el tema de las costas en el artículo 505 del Código Civil no constituye una metodología acertada porque esta disposición se refiere a los efectos de las obligaciones y no a las causas, como se ha dicho. Si se considera que el pago de las costas es una obligación, tendría que haberse considerado el tema como causa y no como efecto de aquélla.

Ni qué hablar de la modificación que se pretende introducir al artículo 521 del citado código. Esta disposición se encuentra en el título referido a las obligaciones que no tiene por

objeto sumas de dinero. ¿Esto significa que las costas se tendrán que pagar en especie? De allí que bajo ningún punto de vista podemos aceptar que la ubicación metodológica es correcta.

La fuente de la obligación de pagar honorarios es el contrato de mandato, y tampoco se tiene en cuenta que el Código Civil deja librado a la legislación local lo atinente a la remuneración de los procuradores y abogados, limitándose sólo a reglamentar el contrato de mandato, que es el que podría existir entre el cliente y el abogado o procurador, como expresamente lo señalan el inciso 6º del artículo 1.870 y el artículo 1.952. Es decir que es el propio Código Civil el que avala la tacha de inconstitucionalidad que también se ha hecho en relación con este proyecto.

Esta norma no va a servir para aburatar los costos y tampoco para combatir los excesos. Estamos en contra de los excesos, pero entendemos que los jueces tienen facultades suficientes para combatirlos.

En cuanto a las verdaderas motivaciones de este proyecto —sobre lo que se interrogaba el señor diputado Balter—, quiero decirle que yo no las he encontrado en el mensaje del Poder Ejecutivo sino en una publicación que tengo sobre mi banca de un llamado Programa de asistencia al Poder Legislativo, editado por la Fundación Mediterránea. En este escrito está la verdadera motivación de este proyecto, por lo que, quizás a fin de año, la Fundación Mediterránea nos dé algún premio por haberles hecho caso y ser buenos alumnos.

Esta publicación dice que: "El proyecto aprobado por el Senado avanza en la dirección correcta en la medida en que recorta los costos que surgen de los honorarios profesionales. Adicionalmente se incorporan mecanismos que extienden la libertad de contratación en la relación profesional-cliente —ya vigente en la Capital Federal— al ámbito provincial. Este hecho hace que los agentes financieros del interior del país también puedan beneficiarse con el proceso de desregulación que ha tenido lugar en el ámbito de la Nación."

Esta libertad de contratación en la relación "cliente-profesional" implica desvalorizar totalmente la profesión de abogado como una mercancía más de la cadena productiva y la abogacía es una profesión noble, ya que el abogado es un colaborador de la justicia. Y, por más abusos que haya habido en el pasado o que pueda haber en el futuro, no podrá desnaturalizarse la noble función de los abogados.

La pretendida disminución de la industria del juicio no se logrará con este proyecto de ley. Lo que sí lograremos es un aumento de la litigiosidad en todos los tribunales. Se terminará perjudicando a los pequeños abogados y, como siempre, a través de todos los proyectos que manda el ministro Cavallo, se favorecerá la concentración en las grandes empresas y en los grandes intereses que están en este momento manejando el país. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Soria).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Gauna.— Señor presidente: desco dejar constancia de esta obstinada negativa que tenemos a escucharnos, como lo demuestran estas bancas vacías, que significan la continuidad del no escucharnos en la Comisión de Justicia, donde intentamos encontrar un camino feliz para lograr el objetivo buscado: morigerar o atenuar el costo judicial al que se ha referido el señor diputado Bracchi.

Pero en esta obstinación de no escucharnos, de no querer dar razón cuando se la debe dar —sea del oficialismo o de la oposición—, nos encontramos con esto que el doctor Trettel Meyer ha calificado bondadosamente como un desguisado legislativo.

Debemos cuidarnos con esta manera de redactar leyes, donde, a través de un desmesurado descontrol a partir de una norma que está dirigida al objetivo de atenuar o morigerar el costo judicial, vamos en camino de reformar varias normas: leyes de fondo como el Código Civil, como la Ley de Concursos, y la 20.744, así como el Código Procesal Civil y Comercial, indirectamente la ley 18.345 sobre régimen procesal del fuero laboral y, por último —entrando al meollo del tema—, la ley 21.839. A esto tuvo que reducirse nuestra actuación y ése fue el planico que el bloque radical formuló en la Comisión de Justicia a efectos de colaborar con la reducción o morigeración del costo judicial.

Hace instantes el señor diputado Bracchi se refirió a un diputado radical que fue procurador y del que no recordó su nombre. Para conocimiento de la Cámara aclaro que fui yo quien en aquella oportunidad intervino en el caso "Etcheverry de Rossi contra la Municipalidad", donde mantuve la tradición jurisprudencial planteando que en la misma ley 21.839 estaba la solución del punto que se cuestionaba en relación con las escalas de los montos a los que se hacía referencia en ese recurso extraordinario.

Sigo sosteniendo que la única oportunidad que teníamos era la de propiciar en la Comisión de Justicia la reforma de la ley 21.839, ya que ése era el camino indicado.

En este desmesurado descontrol legislativo en el que estamos incurriendo al tratar este proyecto de ley hemos caído en la situación que hace instantes refería el señor diputado Muñoz. ¿Qué tiene que ver la morigeración o atenuación del costo judicial con la reforma de las incumbencias profesionales? ¿Qué relación tiene el artículo 505 del Código Civil con este tema? El Código Civil no hace referencia al tema arancelario profesional; por lo tanto no puede ser ése el camino que se adopte para avanzar sobre las provincias.

Por otra parte, el proyecto es contradictorio, porque por un lado, obliga a los jueces al incluir este tema en la legislación de fondo y, al mismo tiempo, invita a las provincias a adherir al régimen propuesto.

Considero que se ha tomado un camino equivocado; ésta no es la manera en que debemos legislar ni el método que la legitimidad democrática exige. No estamos aquí para destruirnos unos a otros mediante planteos legislativos de diversa índole. Debemos intentar legislar para el conjunto de la sociedad argentina; a veces el oficialismo tiene razón y, en ese caso, debemos dársela. Pero en otras oportunidades es la oposición la que tiene razón, y también debemos concedérsela. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Soria). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Varela Cid. — Señor presidente: por si alguna vez alguien leyera la versión taquigráfica de esta sesión aclaro que soy el primer legislador que hace uso de la palabra en este debate que no ejerce la profesión de abogado o contador. Aclaro esto porque algún lector distraído del Diario de Sesiones puede pensar que para opinar sobre esta materia referida a los honorarios profesionales es necesario ser abogado o contador.

La intención de mi intervención es bajar el nivel de la discusión a las cosas que nos pasan: por ejemplo, a los pequeños y medianos empresarios. No he de hacer autismo jurídico; voy a hablar de las cosas que les ocurren a los pequeños zapateros, carniceros o editores.

Hasta este momento se ha estado hablando en abstracto. Por ejemplo, se ha dicho qué tiene que ver este proyecto con los costos. Por ello, es bueno traer a la memoria de los que están presentes: —por si quedara alguno que no es abogado— las cosas concretas que hoy estamos padeciendo.

Hablando del federalismo y de no avasallar las legislaturas provinciales, cabe recordar que en la provincia de Córdoba se dictó una ley a

medida, la llamada ley Ortiz Pellegrini, de regulación de honorarios, precisamente dos meses antes de que se regulen los honorarios por la quiebra del Centro Financiero de Córdoba; pero, ¿saben a quién?, no al síndico que hizo la verificación tardía, al que ya le habían regulado dos mil pesos aproximadamente, sino al abogado del síndico que hizo la verificación tardía.

El artículo 7º de esta iniciativa insiste en el error. Lamento que sobre las bancas de muchos diputados esté el proyecto de la Fundación Mediterránea pero no se encuentre uno de mi autoría que data del año 1989 sobre regulación de honorarios. En mi proyecto no consideraba que en caso de verificación tardía los honorarios tuvieran que regularse sobre el crédito insinuado o verificado, sino sobre el crédito realizable.

Por si algún diputado aquí presente que no sea abogado quiere refrescar la memoria, el monto verificado del Centro Financiero de Córdoba—que, como dije, tuvo una ley provincial a medida dos meses antes de la regulación de honorarios— era de 150 millones de dólares. El monto realizable producto de la liquidación de los bienes del patrimonio del Centro Financiero fue de 128 mil pesos. El abogado Ruiz fue a cobrar al Banco Central 52 millones de dólares. No llego a entender por qué a los que no somos abogados nos resulta tan fácil comprender el espíritu de esta ley mientras que a los abogados les resulta tan difícil.

¿Quién gana 52 millones de dólares? En reiteradas oportunidades he mostrado esa hojita famosa de diez líneas por la que este abogado se hizo acreedor a 52 millones de dólares. Es incomprensible que en este recinto se haya dicho repetidamente que esta situación en nada baja los costos.

Pero pasemos al artículo 9º, al que me referiré en el tratamiento en particular de la iniciativa. Este artículo señala que los peritos intervinientes podrán reclamar de la parte no condenada en costas hasta el 50 por ciento de los honorarios que les fueron regulados. Oportunamente voy a solicitar que este artículo sea corregido.

¿Qué significa el contenido de este artículo? Vamos a traducirlo al cordobés básico. Eso quiere decir que una persona insolvente busca un abogado inescrupuloso —no inventé este término pues ya ha sido mencionado varias veces en este recinto— y emprende una aventura judicial contra cualquier pequeño empresario, y

no contra los grandes empresarios pues ellos tienen fuertes estudios jurídicos y están absolutamente prevenidos. Si se puede sorprender a quien tiene una empresa con cincuenta peones que fabrica zapatos. Entonces se emprende una aventura judicial que empieza por 30 mil pesos, se incluye un beneficio de litigar sin gastos y después se amplía el monto. Como el beneficio de litigar sin gastos va por cuerda separada, usted pasa años litigando. Ni a la persona que se lanza a la aventura judicial ni al abogado les importa el resultado del juicio. Si el monto de la demanda es de un millón de pesos y los honorarios ascienden al 25 por ciento, el que haya ganado el juicio tiene que pagar 125 mil pesos.

¿Cómo vamos a seguir preguntándonos en qué afecta todo esto? ¿Cuál fue el último pequeño empresario con el que ustedes hablaron? ¿Nunca escucharon hablar de las aventuras judiciales? ¿No saben lo que siente un pequeño empresario cuando recibe la primera cédula y paga aunque sepa que tiene razón? ¿A quién tienen miedo, a los arquitectos, a los ingenieros? Esto no puede ser una cuestión corporativa, tenemos que legislar para toda la Nación. Se acababa de decir recién que por un juicio de mil pesos le van a regular 250 pesos, ¿cuánto quieren que le regulen por un juicio de ese monto? Por un juicio de un millón, el que gana tiene que pagar 125 mil. Creo que éste es un discurso para los que no somos abogados.

Recién escuché hablar de la realidad nacional. ¿Realmente creen, con todo respeto —y en particular me dirijo a mi amigo y compañero Estévez Boero— que la realidad nacional tiene que ver con la concepción del país? ¿Cuál es la concepción del país? ¿Qué un pequeño empresario se sienta perjudicado por un abogado inescrupuloso e insolvente que destruye una empresa tras una aventura judicial? Hasta se llegó a hablar de distribución de ingresos. ¿Quisiera saber si los abogados tienen planes especiales para distribuir los ingresos. Es más: se habló de capacidad ética y de los colegios de profesionales.

Recuerdo que en este mismo recinto hemos acusado al juez Nicosia. Los abogados patrocinantes de Ferrocarriles Argentinos y las partes privadas convenían imprimir los tickets y se entablaban juicios contra la empresa estatal por 20 millones de pesos. Yo informé esto al Colegio Público de Abogados. Un juez dictó una condena de dos años de prisión para los responsables, quienes luego de salir de la cárcel continuaron ejerciendo la profesión.

Por consiguiente, no veo de qué manera con este proyecto de ley estamos afectando la ética de los colegios profesionales. Cuando en la Comisión de Juicio Político los invitábamos a asistir para informarse de lo que hablabamos y cuando el juez ordenó la prisión de los letrados inescrupulosos, el colegio no tomó ninguna medida, es más: quien defendió en el Senado al doctor Nicosia fue el presidente de la Comisión de Ética del Colegio Público de Abogados.

No veo por qué motivo ahora resulta que estamos afectando los intereses nacionales porque pedimos la libre contratación. ¿Así que una persona puede contratar libremente a un arquitecto para que dirija la construcción de una casa, o a un ingeniero, pero se agravia la profesión del abogado si se lo quiere contratar libremente? ¿Por qué un empresario no puede contratar libremente los servicios profesionales de un letrado patrocinante y sí los de un arquitecto o un ingeniero? Y por eso se está en contra de este proyecto de ley.

En ciertos aspectos yo también estoy en contra del proyecto en consideración y a favor del que suscribo. Ahora comprendo por qué nunca fue tratado mi proyecto desde 1989, a pesar de que lo he reiterado cada vez que caucaba, ni nunca tuvo dictamen de comisión. Festejo que el señor ministro de Economía haya tomado aquellas ideas para plasmarlas en este proyecto. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Soria).— Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.

Sr. Antelo.— Señor presidente: he pedido la palabra para que el cuerpo no tenga ninguna duda de que el bloque Demócrata Progresista va a votar afirmativamente el dictamen de minoría, que incluso lleva nuestra firma.

El dictamen fue suficientemente explicado por el señor diputado Trettel Meyer, quien con toda enjundia, con verdadera solvencia jurídica y política, informó sobre el mismo.

Por nuestra parte, afirmamos rotundamente que rechazamos el dictamen de mayoría porque consideramos que el Congreso es incompetente para legislar sobre la materia, que compete exclusivamente a las jurisdicciones provinciales.

Nosotros entendemos que las leyes formales son un resorte exclusivo de las provincias, y que si en algún momento las "perforaron" —como dijo en una feliz expresión el señor diputado Bracchi— fue por circunstancias muy particulares sobre las que habrá que volver, pues han quedado como un baldón dentro de nuestra legislación. Por supuesto que los hombres que hicieron nuestra nacionalidad y que fueron

creando un sistema para la posteridad no confirieron la necesidad de una normativa distinta a la de nuestra Constitución Nacional, reformada o no. Las provincias son las que deben resolver sobre el tema de los honorarios de los profesionales porque ese es un requisito del derecho de forma. Este Congreso sólo se puede expedir sobre el proceso que rige en la justicia federal y en la nacional, tal como lo sostiene el dictamen de minoría; de otro modo, estaría incursionando en una jurisdicción que no puede invadir.

Por lo expuesto, apoyamos el dictamen de minoría y rechazamos el de mayoría en el entendimiento de que atenta contra las provincias en sus derechos legítimos no delegados. (*Applausos.*)

Sr. Presidente (Soria).— Tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Fragoso.— Señor presidente: con el objeto de ser breve trataré de pasar por alto las agresiones gratuitas que un diputado preocupante infirió a algunos profesionales. Es obvio que si uno identifica al abogado con el cliente es muy probable que los defensores de los empresarios delincuentes sean abogados delincuentes como en otros tiempos eran considerados subversivos los abogados que defendían a los presos políticos.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º de la Honorable Cámara, doctor Carlos Alberto Romero.

Sr. Fragoso.— Los profesionales nada tienen que ver con aquellos a quienes defienden o asisten. Sin lugar a dudas, los abogados del legislador que gratuitamente ha pretendido referirse en forma maliciosa a algún profesional y en especial a los abogados, nada tienen que ver con él, o por lo menos así lo espero.

El objetivo del proyecto de ley en consideración es bajar el costo judicial. Al respecto quiero recordar que no siempre los objetivos que se persiguen se logran por medio de los instrumentos que sanciona este Congreso de la Nación. Por ejemplo, recuerdo la denominada "ley Martínez Raymonda" sobre indexación, cuya aplicación práctica no nos ha llevado todavía a ninguna desindexación práctica en la República Argentina. Se pretendió encontrar una solución al proceso hiperinflacionario y los costos que generó, procurando que en definitiva la obligación se ajuste al objeto final del proceso sobre la base del costo actual del servicio. Todavía no conozco una aplicación efectiva, práctica y ge-

neralizada que provoque ese resultado. Con esto va a ocurrir lo mismo.

Si por vía de hipótesis uno se pusiera a efectuar ejercicios prácticos o teóricos sobre la base de aplicación de la futura norma, ¿a qué obligación tendríamos que referirnos? ¿A la obligación principal o a las obligaciones accesorias? ¿Nos estamos refiriendo a los intereses que generan las obligaciones como importe final? ¿Nos estamos refiriendo a las nuevas obligaciones que se generan a partir de los incidentes que puedan provocarse en un juicio?

Puedo decirles que si este proyecto de ley llegara a sancionarse tal como ha sido redactado —al margen de los vicios de inconstitucionalidad que contiene, a los cuales con toda claridad se han referido los señores diputados Orquín y Trettel Meyer—, va a generar, en manos de verdaderos inescrupulosos, una innumerable cantidad de procesos a partir de una obligación. En consecuencia, el resultado final va a ser una multiplicación de los juicios.

¿Qué va a pasar con aquellos procesos que no tienen un contenido patrimonial? No todos los juicios tienen un contenido patrimonial en la República Argentina. En este sentido, quiero señalar que los juicios no son solamente un problema de los abogados. Los juicios son el resultado de las leyes y de los derechos que acuerdan esas leyes. Incluso alguien pretendió referirse a los costos argentinos preguntando dónde se había visto un costo del 50 por ciento sobre la base de los litigios.

Hay que observar cuál es la experiencia judicial de otros países para darse cuenta de lo que son los costos de los juicios y para poder apreciar lo que es la verdadera generación de procesos a partir del derecho que tiene la gente.

Por ejemplo, en los Estados Unidos se está produciendo en la actualidad una gran cantidad de juicios derivados del acoso sexual en las relaciones laborales. No va a pasar mucho tiempo para que en la Argentina ocurra lo mismo. En ese caso le vamos a echar la culpa de los costos laborales a los nuevos juicios generados a partir de concepciones admitidas como lesivas por nuestro derecho?

¿No conocen los señores diputados los juicios que se producen en el primer mundo por responsabilidades aseguradas? Ya van a ver cuando se generalice en la República Argentina lo que ha constituido una acción habitual relacionada con los juicios por mala praxis. Entonces, ¿a quién vamos a echar la culpa? ¿A los profesionales o a las situaciones de hecho y a la legislación en vigencia?

Además, ¿el costo es siempre igual al importe final que debe pagarse? ¿En el costo no debe estar incluido el tiempo que transcurre hasta que concluye un proceso? El señor diputado Varela Cid dice que el 25 por ciento es muchísimo. Pero es muchísimo cuando se mide en relación de días o meses. Pero el 25 por ciento es despreciable cuando se habla en términos de años; si no, pregunten cuánto cuestan en un banco los intereses en el período de un año y cuánto se paga a cuatro, cinco o diez años. Así observaremos que lo que es importante en términos de días es absolutamente despreciable en términos de años. El costo no siempre es la resultante económica final, pues también implica el tiempo que insuena para el ejercicio de las profesiones.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo Pierri.

Sr. Fragoso. — No puedo dejar pasar por alto dos cuestiones que me parecen importantes, pues se vinculan con el problema de constitucionalidad al que hicieron referencia los señores diputados Trettel Meyer, Orquín y Balter, entre otros.

Ellos han dicho que no se violentan las normas constitucionales cuando se refieren a que las disposiciones de naturaleza procesal corresponden a las provincias porque el origen de la obligación debe nacer de las leyes de fondo; efectivamente, la causa de las obligaciones arancelarias nace del Código Civil, y además, está en las normas del mandato y de la gestión. Esa es la fuente de las obligaciones.

Creo que el señor diputado Bracchi se confundió al decir que estábamos creando una nueva fuente de obligaciones, pues ello no es así. Lo que está reservado a las provincias es el procedimiento y el *quantum*, el monto final. Cuando el señor miembro informante hacía referencia a los casos específicos del bien de familia o la tutela, debe tenerse en cuenta que se trata de casos muy concretos en los que el Código Civil ha regulado aranceles u honorarios como una consecuencia necesaria de la figura acerca de la que legisla; pero en materia de mandato, el Código Civil remite a lo que determinan las leyes provinciales.

Finalmente, me pregunto a quién va a beneficiar esta ley. Cuando se imponen las costas, debe saberse con absoluta claridad que ellas son impuestas al vencido en el derecho, en definitiva, al deudor. Dejando de lado la legislación civil, quiero referirme a la legislación la-

boral, pues se modifica el artículo 277 de la ley 20.744. Quiero preguntar no a los ignorantes del derecho sino en todo caso a quienes han recorrido los tribunales y a los sindicalistas presentes en este recinto, cuántos son los juicios laborales que pierden los obreros con respecto al total. Me atrevería a decir que el 85 por ciento de los juicios son ganados por ellos.

La dilación es un instrumento habitual en las organizaciones patronales o específicamente en algunos empresarios cuyo negocio principal, en períodos de hiperinflación, fue dilatar el pago de sus obligaciones durante dos o tres meses. Eso les bastaba para liquidar totalmente la deuda. Esta situación existió durante muchos años, hasta que la Corte cambió el criterio nominalista de la moneda y permitió la indexación; pero aun en los procesos con indexación, el que perdió siempre fue el obrero cuando cobró el resultado final del juicio.

Entonces no me pueden venir a decir que estamos para beneficiar al empresario honesto y bueno; por lo menos en esta materia, que se refiere a la modificación de la ley 20.744, estamos para beneficiar al empresario que debe y no quiere pagar sus obligaciones laborales y que termina siendo condenado en un juicio.

De manera que no nos engañemos o por lo menos no tratemos de engañar a la gente con el sentido de esta norma. Esta norma no es protectora del honesto deudor sino de los deudores maledicentes, reticentes, de aquellos que se benefician por la acción de los tribunales.

Para ellos es esta ley, no para los acreedores honestos que pretenden cobrar sus acreencias en tiempo. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.

Sr. Varela. — Señor presidente: escuché con absoluta atención los distintos argumentos de los señores diputados preocupantes sobre este proyecto de ley que estamos tratando, casi todos ellos basados en el concepto de la norma jurídica y del derecho como concepto absoluto y único que rige las relaciones entre los hombres y la vida en sociedad.

Allá en el siglo V antes de Cristo, el filósofo Heráclito de Efeso solía decir que en el perpetuo fluir del universo nada es y todo deviene, que lo humano vive en constante movimiento y que la experiencia social es sin duda renovación de conceptos, normas y valores.

Allá por el siglo XVIII ya los filósofos del derecho decían que los conceptos de lo absoluto debían ser sustituidos totalmente por el relativo y la inmovilidad por el movimiento.

Este es el tema que hoy estamos tratando: la colisión siempre permanente entre los conceptos de justicia y de derecho. En 1916 José Ingenieros decía que las grandes crisis ofrecían la oportunidad de las reformas éticas, jurídicas e institucionales y que era necesario desafiar las resistencias que apuntalan el pasado porque los hombres, como los pueblos, navegan en forma permanente sin llegar nunca.

En la historia de la humanidad el mayor obstáculo para el progreso de los pueblos es precisamente el fenómeno de la fosilización de las leyes porque las leyes no son immanentes ni absolutas, porque la realidad social siempre varía y es necesario experimentar los cambios que vayan acentuándose y regulando las variaciones que la sociedad exige.

Esta obra nunca es producto de los guardianes de museo, siempre es producto de quienes quieren transformar, demoler y modificar el pasado. Es de aquellos que tienen los gestos audaces para modificar las situaciones que están en contra del concepto de la justicia.

La justicia no oculta las lacras sociales, sino que las muestra. El remedio consiste, precisamente, en suprimirlas mediante el cabal conocimiento y la aplicación del concepto de justicia. La justicia procura el equilibrio entre la moral y el derecho. Acatar la ley es simplemente un acto de disciplina; en cambio, respetar la justicia es un deber del hombre, aunque para ello deba pasar por alto algunas imperfecciones que contiene el proyecto.

Esta iniciativa, precisamente, prioriza el concepto de justicia sobre el ya superado del derecho inmóvil. Es verdad que este proyecto puede presentar algunas imperfecciones de tipo técnico, pero es una verdad mayor que esta norma viene a solucionar uno de los graves problemas que tenemos en la actual legislación argentina y que ha sido la causa natural de las dificultades que poseen tanto el Estado como los particulares.

De ninguna manera pienso que este proyecto de ley es inconstitucional y que enerva el derecho de las provincias. El dictado de normas sustanciales no es una actitud que recién hoy asume este cuerpo, sino que ya lo hizo históricamente mediante leyes sucesivas que ha sancionado y que, incluso, llegaron a incursionar en materia procesal, como es el caso de la ley de quiebras. Esto de ninguna manera significa afectar las facultades reservadas a las provincias por el artículo 121 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, modificar distintas leyes mediante un solo plexo legal no constituye una impropiedad técnica o legislativa, en la medida

en que esas reformas se incorporen necesariamente a las propias leyes modificadas mediante el articulado de una norma de carácter general.

La materia de regulación de honorarios a la que hicieron referencia la mayoría de los señores diputados preopinantes no se encuentra afectada por el contenido sustancial de esta iniciativa, con excepción de una o dos expresiones de carácter gramatical, que podrían ser perfectamente corregidas durante el tratamiento en particular.

Hay que solucionar un problema, que consiste en los juicios cuyos montos de honorarios y costas exceden todo concepto de justicia y racionalidad. Dejar de hacerlo significa convalidar una injusticia y no corregir lo que está mal. Por eso, más allá de las disquisiciones de carácter técnico y de algunas cuestiones legislativas, el proyecto en consideración viene a reimplantar un concepto de justicia y de equilibrio en las relaciones sociales, que es absolutamente necesario.

Por eso debemos priorizar la necesidad de la erradicación de un mal por sobre todas las cuestiones formales perfectamente corregibles o perfectibles en este momento o a través de leyes sucesivas.

No violenta mi conciencia de manera alguna, pese a haber sido uno de los coautores del Código de Procedimientos Civil de mi provincia y pese a ser el autor de la ley de arancelamiento profesional de la provincia de Tucumán, votar favorablemente esta iniciativa, porque considero que en modo alguno constituye una intromisión en los derechos reservados a las provincias ni representa una afectación a los intereses que son puestos en juego en un proceso judicial.

Si el objetivo es restablecer el concepto de justicia, el equilibrio en las relaciones sustanciales y la prudencia en el manejo de las regulaciones, esta norma es buena. Su aplicación será la que determine la verdad acerca de si ha sido útil o no a los objetivos perseguidos.

Contrariamente a lo que expusieron algunos legisladores, sus objetivos superan cualquier suspicacia, porque más bien peca de ingenua. Asimismo, en cuanto a lo sustancial, apunta con objetividad a la eliminación de una injusticia basada en una norma de derecho. Desde el punto de vista legislativo sus imperfecciones son de carácter superable; respecto a la metodología, la norma es perfectamente aplicable y tiene antecedentes por demás elocuentes en la legislación argentina y acerca de su resultado podríamos señalar que será o no positivo en función del valor que tengan los jueces para aplicar estrictamente el concepto de justicia.

Por eso considero que quienes somos hombres de derecho y quienes no lo son podremos votar favorablemente con absoluta tranquilidad esta iniciativa, porque de una vez por todas estaremos aplicando el concepto de justicia. (*Aplausos.*)

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.

Sr. Rojo. — Señor presidente: dado lo avanzado de la hora sólo haré una pequeña aclaración con relación al tema de las incumbencias profesionales, ya que en este aspecto la iniciativa implica colocar dentro de aquéllas un caballo de Troya al desvalorizar la tarea y la carrera de contador público.

En este sentido manifiesto con libertad de conciencia que teniendo en cuenta el fundamento de este proyecto de ley vinculado a la reducción del costo judicial, durante la consideración en particular votaré en forma negativa los artículos que afectan las incumbencias del profesional contador.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Dumón. — Señor presidente: no tenía pensado hacer uso de la palabra por sentirme suficientemente representado por los miembros de la bancada radical, e incluso por algunos de otros bloques que realmente dieron una explicación cabal de por qué el dictamen de minoría es el más adecuado para el orden jurídico. Debo reconocer que en los argumentos vertidos por los miembros de la bancada mayoritaria existen algunos basados en principios de carácter jurídico, aunque equívocos a nuestro juicio. Estamos tratando el tema de los costos judiciales, respecto de los cuales tenemos una distinta interpretación, como aquí se ha señalado.

Para la bancada mayoritaria estos costos tienen una enorme importancia en la estructura de precios relativos del país. Para nosotros se trata de casos excepcionales, pero aun así estamos dispuestos a hacer las adecuaciones pertinentes de acuerdo con la competencia que tiene este Congreso de la Nación.

Hemos sostenido que la competencia legislativa en materia de regulación de honorarios pertenece exclusivamente a las provincias. Se trata de facultades reservadas por el artículo 121 de la Constitución Nacional. Cuando el tema de los honorarios judiciales —en alguna materia— se ha querido delegar en la Nación, expresamente se lo ha previsto en el texto de la Constitución, como sucede en el caso de la bancarrota, respecto del cual se atribuye al Con-

greso de la Nación facultades para dictar una ley sobre honorarios judiciales.

Decimos entonces que es incorrecto proponer la modificación del artículo 505 y que este dictamen de mayoría tiene incorrecciones aun mayores, como lo acaba de señalar con acierto el señor diputado Rojo respecto de la ampliación de competencia en los temas de quiebras y concursos para los abogados.

Pero lo que trae al debate el señor diputado Varela Cid —que luego de su exposición se retira del recinto— es una confusión que termina en una agresión impropia e injustificada, porque se ha querido hacer aparecer a todos los que somos partidarios del dictamen de minoría como defensores de la corporación de los abogados y contadores.

Esto es una falacia, pero además lo es para ensuciar la cadena. Así no se actúa cuando se pretende legislar correctamente. Se ha hecho una utilización teatralizada y espectacularizada de algunos casos excepcionales que de ninguna manera son el símbolo de lo que sucede en materia de regulaciones, y lo que es más grave, se ha hecho profesión de la ignorancia del derecho, descalificando a quienes tienen una formación académica y son abogados o contadores y por el hecho de haber pasado por la Facultad de Derecho o la de Ciencias Económicas deben rendir cuentas de su ecuanimidad, equilibrio y del despojo de sus formaciones particulares al defender cuestiones que tienen que ver con el interés general.

No es éste un argumento válido para contestar los enojados argumentos vertidos desde la minoría. Por ello es necesario ahondar en algunos otros presupuestos dados brillantemente por algunos señores diputados que corresponde recordar.

Tomando en cuenta la argumentación brindada por el señor diputado se puede llegar a la conclusión de que las provincias son minusválidas, incapaces de dictar legislaciones y de formular regulaciones de honorarios. Concretamente se hizo referencia al caso de la provincia de Córdoba. ¿Esta provincia no tendrá Legislatura ni leyes que regulen los honorarios? ¿Cuánto inciden los honorarios en el costo judicial de esa provincia? ¿Esa incidencia es acaso la que marca la estructura de precios en Córdoba? ¿No será acaso que la incidencia de los costos en la estructura relativa de precios está provocada por los juicios que causan las malas leyes que se sacan a empujones y tomando en cuenta sólo el número sin atender las razones y pon-

deraciones del orden jurídico como conjunto armonioso de derechos y deberes, de autonomía de la voluntad y restricciones del orden público en el equilibrio entre lo particular y lo público? ¿No será que ese costo judicial es provocado por las malas leyes cuando se pretende meter en corsé una realidad que se resiste, y se dictan normas como las actuales? ¿Acaso el señor diputado que no tiene formación de abogado no ha tenido en cuenta cuántos juicios podemos provocar esta noche si sancionamos una mala ley?

¿Acaso alguien pretende decir que se condena al que tiene razón? Por el contrario, se condena al que no cumplió con el derecho, de manera que el costo que estamos defendiendo es el de los incumplidores.

Es razonable que se tenga derecho al simplismo por ignorancia, pero debería tenerse la prudencia de observar el razonamiento minucioso, prolijo y profundo de los que estudiaron la materia en lugar de concluir con una suerte de agresión injustificada para quienes han firmado el dictamen de minoría, porque no lo merecen.

Es cierto que en la Argentina hay problemas de costos, como ocurre en otros países. Estos se producen fundamentalmente cuando se dictan leyes que rompen las reglas de juego, ocasionan conflictos y generan comportamientos disociados con el orden jurídico. ¿Pero esa situación se corrige modificando las reglas de juego para favorecer al perdedor, es decir, a quien no cumplió con el derecho? ¿Acaso muchas veces el perdedor mayúsculo en la Argentina en los juicios no es el propio Estado? ¿Por qué lo es? Creo que estamos ante una cuestión que merecería ser concluida con otra seriedad.

El problema existe pero con otras causas y debería ser resuelto de acuerdo con el orden jurídico. La prelación legal indica que ésta es una materia eminentemente provincial. Sólo corresponde a este Congreso legislar a nivel nacional en materia federal. Por eso el dictamen de minoría hace esta vinculación con la ley de regulación de honorarios; establece máximos y también mínimos, y esto se relaciona directamente con el funcionamiento de la justicia.

Cuando ponemos topes en los honorarios, después debemos mirar a los justiciables para saber quiénes son los que van a tener derechos. ¿Qué abogado va a tomar los juicios cuando el deudor no pague lo que tiene que pagar? Tendrá que pagarlo el acreedor y para ello tendrá que tener una cartera gorda. La conclusión de todo esto es que cuando establecemos estas regulaciones

la Justicia queda reservada para los poderosos.

El orden jurídico debe ser un conjunto armonioso. Cuando esa armonía se rompe, el sistema cae; y si ello sucede impera la ley de la selva, y en ella los que ganan son los poderosos porque tienen el derecho de la fuerza. Aquí estamos en defensa de los derechos de todos. De manera que, con todo respeto, advertimos a la mayoría que el asunto es menor y que estas cuestiones deben corregirse por otras vías.

Por estas razones, convocamos una vez más a los legisladores de la mayoría a que podamos escucharnos —como decía con acierto el señor diputado Gauna— para tratar de encontrar la mejor legislación, que en este caso sin dudas es el dictamen de minoría. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a llamar para votar.

—Mientras se llama para votar:

Sr. Arias. — Pido la palabra para una aclaración.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Arias. — Señor presidente: después de haber escuchado con mucha atención los distintos discursos tendientes a respaldar el dictamen de minoría y dejando de lado la cuota de tremendismo —aunque valoramos la vehemencia con que se expusieron las distintas argumentaciones—, creo que quienes apoyamos el proyecto venido en revisión del Honorable Senado podemos votarlo con tranquilidad sabiendo que no efectuamos ninguna lesión a la razonabilidad ni al concepto de justicia. Pero, antes de continuar, quiero formular algunas aclaraciones.

En primer lugar, los hombres que frecuentamos el derecho sabemos que la litigiosidad no es producto de las leyes sino de las conductas humanas.

Por otra parte, toda norma jurídica regula las conductas de los sujetos pero tiene otro destinatario, que es el juez, quien aplica la ley. En consecuencia, el alegato del señor diputado Orquín tenía un destinatario —como expresó claramente—, que era el juzgador en su momento, pero no era necesario efectuar esta apelación porque esta realidad se da permanentemente.

En esta norma, efectivamente, lo que hemos hecho ha sido flexibilizarla para dar al juez mayores posibilidades de que ponga su cuota de comprensión, de valoración de las relaciones y de elaboración de un texto legal en los casos concretos a los que deba aplicarla.

Cuando comenzamos a analizar cuál fue la esencia de los fundamentos o de los cuestionamientos, advertimos que en primer lugar se puso el acento —por orden de importancia— en las incumbencias, en el artículo 6º, pero se manejó como si esto fuese blanco o negro. Se amplía la posibilidad de que otro profesional, además del contador o egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, pueda desempeñarse en una sindicatura. Pero no se lo planteó en esos términos sino como el remplazo del contador por el abogado.

Creo que este es un equívoco involuntario, ya que se está dando al juez la posibilidad de determinar en cada litigio, en cada situación concreta o juicio universal, quién es el síndico más competente. Indudablemente, si la cuestión central es una calificación de créditos, en la interpretación de una norma será mucho más útil el abogado que el contador. Si la situación reviste otras características, el juez las valorará y determinará en cada caso preciso...

Sr. Muñoz. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Arias. — Sí, señor diputado.

Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por el Chaco.

Sr. Muñoz. — Señor presidente: quisiera saber si el señor diputado Arias presupone la eliminación de la desinsaculación del síndico o que las listas van a ser conjuntas. Me gustaría saber cómo ve él la posibilidad de integrar una lista conjunta de abogados y contadores y, a su vez, si la incumbencia del abogado titular le permite determinar estado, contables y patrimoniales como un contador.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor miembro informante del dictamen de mayoría.

Sr. Arias. — Señor presidente: no he dicho tal cosa. Lo que estamos diciendo es que es el juez quien va a determinar quién es el síndico más idóneo en cada caso concreto y no lo vamos a predeterminar, porque de lo contrario va a suceder lo que normalmente acontece en nuestros tribunales: que el contador va con sus abogados a incidir directamente en los costos de los procesos.

Sr. Balter. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?

Sr. Arias. — Si me permite terminar la idea, con todo gusto se la concederé.

Supongamos que esta norma está incompleta: si así fuese avancemos en la elaboración de un

texto legal que determine con precisión los ámbitos propios de cada una de las incumbencias. Esta es nuestra tarea y nuestra responsabilidad como legisladores.

El proyecto en consideración ha sido tildado de inconstitucional. Al respecto no voy a expresar nuevamente mi opinión personal, que ya brindé anteriormente, y me remitiré al criterio imperante en la propia Corte Suprema de Justicia sobre esta cuestión que se debatió con tanta firmeza en este recinto. Ya en 1922 se señalaba lo siguiente: "Las provincias no tienen, respecto del Código de Comercio, como respecto de los códigos Civil, Penal y de Minería, otra atribución que la de aplicarlos (Constitución, artículo 67, inciso 11). Son los mismos códigos los que crean las acciones de las partes interesadas y determinan su naturaleza en cuanto lo consideran conveniente. Así, el Código Civil ha establecido el procedimiento sumario para la acción de alimentos (artículo 375) y para las acciones posesorias (artículo 2501) y ha reglamentado otros juicios, sin que las provincias se sientan afectadas en sus facultades. Si al aplicar los códigos, hay puntos de procedimientos no previstos por ellas, las provincias pueden legislar para llenar esos vacíos; pero no son ellas, sino el Congreso, quien determina la materia y límites de los códigos Civil, Comercial, Penal y de Minería, conforme a la Constitución Nacional." Firma este dictamen José Nicolás Matienzo, una personalidad con suficiente relieve y peso en nuestro derecho público. Estos conceptos mantienen su plena vigencia por cuanto los artículos 75 (inciso 12), 191 y 126 del texto constitucional actualmente vigente no los han modificado.

Se preguntaba si los honorarios constituyen una obligación principal o accesoria. Al respecto la Corte ha determinado con claridad lo siguiente: "...no cabe predicar la existencia de una relación de accesoriadad entre la obligación de pagar los honorarios con la de cumplir con el capital de la condena...". Estos conceptos corresponden a la causa "Moschini, José María c/ Fisco Nacional", del 28 de julio del corriente año.

Con relación a las objeciones que se formulan al contenido del artículo 525, quiero hacer un reproche a los compañeros de la oposición: no se han detenido a leer nuestra sanción del 3 de noviembre de 1993, porque de lo contrario el sentido del cuestionamiento hubiese sido distinto. En ese caso habrían preguntado por qué el artículo 521 fue prácticamente cambiado en su contenido. Nadie lo hizo; sencillamente expresaron que no veían cuál era la vinculación

entre el nuevo texto y el anterior. La explicación es muy sencilla: el artículo 521 con su contenido anterior fue eliminado porque en la estructura de nuestra propuesta también se eliminó la diferencia entre el daño contractual y el daño de carácter delictual o cuasi delictual. En consecuencia, ustedes deberían habernos reprochado por qué no planteamos la remisión al artículo 906 en lugar del 521. No lo hicieron porque, reitero, no leyeron nuestra propia sanción.

Cabe agregar que el artículo 505, que mereció tantas críticas, tiene el mismo contenido que el artículo 1º del dictamen de minoría. Es evidente que no existen dudas en cuanto a que es necesario modificar la legislación en vigencia para bajar los costos procesales.

Se ha dicho que es reconocida la facultad de las provincias para dictar leyes arancelarias, pero en muchos casos los honorarios se calculan sobre el monto de la demanda y no sobre el monto del juicio. Por eso también consideramos fundamental modificar el Código Civil y darle carácter nacional a esta cuestión. Además, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha declarado que el Congreso puede sancionar normas de carácter procesal —reiterando el concepto de Matienzo de 1922— que involucren o afecten facultades locales cuando ello sea necesario para asegurar la naturaleza sustancial de la obligación. Por igual se ha dicho que esto es así porque, cuando las costas superan el valor real del juicio o la proporción de lo razonable, la obligación que es regulada por ley del Congreso termina siendo desvirtuada y desnaturalizada. Esta es la opinión del señor senador de la Rúa, expuesta el 27 de abril de 1994 en el Senado de la Nación, cuando se trató este proyecto de ley.

O sea que debemos ponernos de acuerdo en unificar criterios, y si bien es cierto que cada uno de nosotros en el campo doctrinario tiene autonomía de decisión, por lo general en la consideración de una misma temática es importante la coherencia en cada partido que constituye un elemento fundamental en política, a fin de analizar proyectos importantes con similitud de opinión.

Por las razones dadas, y para no agotar la paciencia de los señores diputados, luego de haber escuchado todos los cuestionamientos que se han hecho, reitero nuestra firme determinación de votar favorablemente el dictamen de mayoría.

Sr. Presidente (Pierri). — Lamentablemente, pareciera que no vamos a conseguir quórum. Por lo tanto, la Presidencia va a proceder a pasar lista.

Antes que ello, desearé informar a la Cámara que hoy hemos mantenido conversaciones con los presidentes de los distintos bloques en relación con la lista de asistencias e inasistencias de los señores diputados a las sesiones, que en los próximos días se dará a conocer. Quizás algunos diputados se enojarán a raíz de esta medida, porque hace algún tiempo que no vienen a la Cámara. Por favor, comuníquenles que van a aparecer en esa lista.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: desearé compartir una reflexión con usted y con los señores diputados. Creo que vale la pena hacer algún esfuerzo para lograr el quórum y de hecho lo estamos haciendo, ya que están llegando varios señores diputados de nuestra bancada. Pero ante la eventualidad de que no logremos el quórum vamos a solicitar un cuarto intermedio hasta luego a las 15 horas. Es decir que trabajaríamos también el día jueves, hecho que podríamos obviar si pudiésemos terminar en el día de hoy. Esa es la razón por la que me parece que vale la pena hacer el esfuerzo para lograr el quórum.

Sr. Presidente (Pierri). — De todas maneras, por más que insistamos en hacer el esfuerzo, parece bastante difícil.

Sr. Bravo. — Entonces, señor presidente, que se pase lista.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. — Señor presidente: en primer lugar, si la Presidencia está decidida a pasar a cuarto intermedio, solicito que se pase lista.

En segundo término, quiero recordar que esta Cámara votó oportunamente una autorización a la Presidencia para que difunda por los distintos medios de comunicación la nómina de los señores diputados ausentes. Hasta ahora no he visto que ello haya ocurrido. Desearíamos recordar a la Presidencia esta facultad que la Cámara le ha otorgado en su oportunidad a fin de que sea realmente utilizada.

La situación resulta muy difícil para todos los señores diputados que estamos presentes en el recinto todo el tiempo y que debimos permanecer con muchas dificultades y también con mucha dedicación. El hecho es que a algunos señores diputados decididamente se les antoja no venir.

Esto nos molesta. Discúlpeme la expresión: estamos "calientes" por este tipo de situaciones, ya que siempre sucede lo mismo. De una vez por todas debemos tomar medidas definitivas y ejemplares con relación a los señores diputados que no concurren al recinto. No se trata de ha-

cer un discurso en cada oportunidad en que esto sucede, sino de llevar a la práctica la aplicación de medidas concretas que aseguren el normal desarrollo de las sesiones.

Esto lo digo como presidente de bloque, con la responsabilidad que me incumbe, y también así se lo solicito al señor presidente de la Cámara. Podemos tener acuerdos y disensos, pero no podemos permitir que esta Cámara no funcione. Esa es nuestra responsabilidad y lo digo como uno de los primeros que tiene que asumir el carácter que le corresponde como conductor del principal bloque de este cuerpo.

No hay duda de que estoy molesto, señor presidente, por querer cumplir mi deber y por imposibilitarlo una minoría de señores diputados que integran esta Cámara. No es justo ni es la forma como el cuerpo se puede prestigiar. Además, los que siempre concurrimos a las sesiones no somos los que tenemos problemas. Que se disminuyan las dietas; que se informe a los partidos o a los distritos. En este aspecto no tenemos inconveniente; sí lo tendrían quienes no vienen nunca. No trabajemos en función de los que no están, sino de los que asisten.

Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.

Sr. Galván. — Señor presidente: está bien que señalemos las responsabilidades. Compartimos las expresiones del señor diputado por La Pampa. Debemos ser parejos en todo y tenemos que decirlo así, aunque corresponda a otros señalarlo.

Hay quienes trabajan y hay quienes no lo hacen. Algunos venimos a las sesiones y otros no. Si estamos inmersos en un sistema republicano, señalemos las responsabilidades. Además, ya a comienzos del año la Honorable Cámara determinó que los días de tablas son los miércoles y los jueves.

Por lo tanto adherimos al pase a cuarto intermedio para hoy a las 15 a fin de avanzar sobre esta legislación tan importante para el país.

Apliquemos el reglamento; que la ley sea pareja para todos.

Demos el ejemplo al país porque todavía hay muchos legisladores responsables que trabajan para la Nación.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia señala que se considerará como ausentes a quienes no figuren en el pase de lista. Esa es la instrucción que doy a la Secretaría, es decir que aparecerán ausentes quienes no figuren en este registro.

—Se pasa lista, registrándose la presencia de 121 señores diputados.

—Al pase de lista, se encuentran presentes los señores diputados Abihaggle, Aceñolaza, Achem, Albamonte, Alvarez Echagüe, Antelo, Arias, Balestra, Balestrini (M. A.), Balter, Barberá, Barriennevo, Baum, Benzi, Bermúdez, Bianchi Silvestre, Bonomi, Borda, Bracchi, Branda, Bravo, Breser, Brunelli, Cabirón, Camara, Camaño, Carca, Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Cordera, Cless, Corchuco Blasco, D'Elia, Dellepiane, Díaz Martínez, Dorón, Domi, Drisaldi, Damón, Escobar, Estévez Boero, Fabrisini, Felloni, Fragozo, Galván, Gauna, Gazia, Giménez (D. A.), Giménez (R. E.), Gioja, Golpe (C. H.), González Cabañas, Granados, Green, Guerrero, Hardy, Hernández, Herrera Arias, Humada, Iturre, Jannarena, Juncosa, Kelly, Kessler, Kolb, Lafalla, Lahoz, Lamberto, Leguizamón, López (J. A.), López Arias, Macedo, Machado, Manfredotti, Maqueda, Martínez (E.), Martínez Garbino, Matzkin, Menem, Mercado, Mercado Luna, Michelli, Michitte, Miglierozzi, Molardo, Moreau, Müller, Muñoz, Neder, Novau, Orquín, Parada, Perri, Pichetto, Pierri, Polino, Ré, Rodríguez (M. E.), Rodríguez Saúdo, Roig, Rojo, Romero (C. A.), Roy, Ruiz Palacios, Salino, Sampietro, Sebastiani, Soria, Sucaria, Tenev, Teodosiu, Togni de Vely, Toma, Toto, Trettel Meyer, Varela, Varela Cid, Venesia, Vicchi y Viglione.

Sr. Presidente (Pierri). — En uso de las facultades que el reglamento otorga a la Presidencia, invito a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta la hora 15.

—Se pasa a cuarto intermedio a los 47 minutos del día 15.

FULVIO F. RAMOS.
Director del Cuerpo de Taquígrafos